

AMPARO INDIRECTO.

QUEJOSO: [REDACTED]

EXPEDIENTE: 1096/2017

ASUNTO: SE INTERPONE  
RECURSO DE REVISIÓN.

000263

escrito  
Sin Copias  
orig-rec 8 copias  
Anexos  
Folios  
Firma  
Con Autorizada  
Ratificó

H. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

Presente.

[REDACTED] por mi propio derecho y en mi calidad de  
impetrante de garantías del presente juicio constitucional, personalidad que tengo  
debidamente acreditada dentro de los autos que integran el juicio al rubro citado,  
con el debido respeto y consideración comparezco ante Usted para exponer:

Que por medio del presente escrito y encontrándome dentro del término  
concedido para hacerlo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos  
107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos; 81 fracción I inciso e), 83 fracción IV de la Ley de Amparo, 10 fracción  
I inciso a) y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la  
Federación, vengo a interponer por su amable conducto **RECURSO DE  
REVISIÓN** en contra de la sentencia pronunciada en la audiencia constitucional de  
fecha trece de Noviembre de dos mil diecisiete, así como los acuerdos  
pronunciados dentro de la misma, por lo que solicito se remitan los autos  
originales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que éste resuelva  
lo que en derecho corresponda.

Por lo anteriormente expuesto, a Usted C. Juez Primero de Distrito en  
Materia Administrativa de la Ciudad de México, atentamente solicito: **20934**

**PRIMERO.** Tenerme por presentado en términos del presente libelo con la  
personería con que me ostento, interponiendo el **recurso de revisión** en tiempo y  
forma.

**SEGUNDO.** Integrar el expediente, remitiendo los autos originales a la  
Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin dicte la resolución que en derecho  
proceda.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE JUSTICIA

2017-11-14 9:02

SECRETARÍA DE JUSTICIA

ANTECEDENTES:

AMPARO INDIRECTO.

QUEJOSO: [REDACTED]

EXPEDIENTE: 1096/2017.

ASUNTO: SE INTERPONE RECURSO  
DE REVISIÓN.

HONORABLES CIUDADANOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Presente.

[REDACTED] por mi propio derecho y en mi calidad de  
impetrante de garantías del presente juicio constitucional, personalidad que tengo  
debidamente acreditada dentro de los autos que integran el juicio al rubro citado,  
por mi propio derecho; señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el  
ubicado en la calle [REDACTED] número [REDACTED] colonia [REDACTED]

MEXICO  
RIL  
EN MATERIA  
ATIVA DEL  
CIRCUITO  
CO, DE

[REDACTED] C. P. [REDACTED] y faculto en términos del  
artículo 12 de la Ley de Amparo al [REDACTED]

[REDACTED] quien es titular de la cédula profesional número 5480875 expedida por la  
Comisión General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, misma  
que se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único  
de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de

Distrito, respetuosamente comparezco ante Usted y como mejor proceda en  
derecho le digo:

Que por medio del presente escrito y encontrándome dentro del término  
legal concedido para hacerlo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos  
107, fracción VII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos; 81 fracción I inciso e), 83 fracción IV, 86 y 89 de la Ley de Amparo, 10  
fracción II, inciso a) y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder  
Judicial de la Federación, vengo a interponer RECURSO DE REVISIÓN en contra  
de la sentencia pronunciada en la audiencia constitucional de fecha trece de  
Noviembre de dos mil diecisiete, así como los acuerdos pronunciados dentro de  
la misma, toda vez que la misma irroga en mi perjuicio los agravios que precisaré  
más adelante.

Primeramente y previo a exponer los agravios que me causa la sentencia  
impugnada, hago del conocimiento de su Señoría que la sentencia que impugno

pronunciada en la audiencia constitucional de fecha trece de Noviembre de dos mil diecisiete, se notificó por medio de lista el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, notificación que surtió efectos el día quince siguiente; de forma que el plazo legal de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo corrió del dieciséis de noviembre al treinta de noviembre de dos mil diecisiete, excluyéndose los días dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete, por ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de tal suerte que el presente recurso de revisión es presentado de manera oportuna.

Seguidamente es de interés del suscrito señalar que esta Suprema Corte de Justicia es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107 fracción VIII inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81 fracción I inciso e) y 83 de la Ley de Amparo; y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de un recurso de revisión interpuesto en ~~contra de una~~ sentencia dictada por una Juez de Distrito en un juicio de amparo en materia administrativa, en el cual se reclamó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de una norma general de carácter federal y en la cual hasta el presente recurso subsiste el problema de constitucionalidad de los artículos de la ley impugnada.

OS ME  
RIEUNAI  
EN MATERIA  
ATIVA DEL  
IRCUNTO.

Así las cosas y ajustándome a los preceptos que rigen el procedimiento, con la finalidad de que cuente con los elementos necesarios para dictar la resolución que conforme a derecho corresponda, expongo para éste efecto los razonamientos lógico jurídicos que se contienen en los siguientes:

#### AGRAVIOS

**PRIMERO.-** La fuente de este agravio es el sobreseimiento indebido que determinó el Juzgador en el considerando **QUINTO** que denominó "Estudio de las causas de improcedencia que resultan fundadas", visible a fojas 30 de la sentencia combatida y que en lo que interesa estableció:

*"En esas circunstancias se estima actualizada la citada causa de improcedencia; razón por la cual deberá sobreseerse respecto de dichos actos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo."*

Sobre el particular, es menester mencionarse que resulta ilegal y errónea la determinación del Juez de Distrito, toda vez que parte de la premisa que los artículos primero y décimo transitorios no causan perjuicio alguno al suscrito, y a

fin de acreditarse lo anterior es de precisarse que, el treinta y uno de marzo de dos mil siete se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual entró en vigor al día siguiente, y que en su artículo primero transitorio establece lo siguiente:

*"PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los artículos 42, 75, 101, 140, 193 y 199, los cuales entrarán en vigor el día primero de enero de dos mil ocho."*

Por lo que resulta evidente que si el suscrito reclama que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en sus artículos 6, 131 fracción I, 134 son inconstitucionales e inconvenientes por vulnerar los derechos humanos y garantías sociales de seguridad social, seguridad jurídica, protección a la familia, derechos a los alimentos y derecho a que se respete mi dignidad consagradas tanto en la Constitución como en los Instrumentos Internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, la sola entrada en vigor y continuación de la vigencia de la ley que se reclama causa agravios al suscrito.

OS 242 317  
TRIBUNAL  
EN M.  
RATON  
CIRCUITO  
CO, D.F.

De tal suerte que, no le asiste la razón al Juez de Distrito al sobreseer respecto de dicho acto reclamado, toda vez que resulta inconcuso que la sola entrada en vigor y continuación de la vigencia de la ley que se impugnó mediante el juicio de amparo, y que ahora es motivo de la presente revisión, causa agravios al suscrito, al contener las normas que el suscrito tilda de inconstitucionales e inconvenientes, por tanto este Órgano Colegiado deberá de revocar la sentencia recurrida por lo que hace al sobreseimiento de mérito y en su lugar analizar los argumentos omitidos por el Juez de Distrito, así como los argumentos esgrimidos en el presente recurso y con base en ello determinar que los artículos 6, 131 fracción I, 134 son inconstitucionales e inconvenientes por vulnerar los derechos humanos y garantías sociales de seguridad social, seguridad jurídica, protección a la familia, derechos a los alimentos y derecho a la dignidad y por ende otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal.

**SEGUNDO.-** La sentencia combatida causa perjuicio a la parte quejosa en virtud de que el Juez recurrido fue omiso en estudiar y dar contestación a la totalidad de los argumentos planteados por el suscrito, violando lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo y consecuentemente los principios de congruencia y exhaustividad que todo acto de autoridad debe de contener, máxime un órgano que funge como revisor y protector de este principio; ya que de haber observado dichos principios y haber estudiado la totalidad de los argumentos vertidos por el impetrante de garantías el Juez de conocimiento

hubiera advertido que los artículos 6, 131 fracción I, 134 y el artículo primero transitorio son violatorios de mis derechos humanos y garantías sociales consagradas en los artículos 1º, 4º, 5º, 14º; 16º párrafo primero; 17º párrafo segundo, 26º A., 29º, 123º párrafos primero, segundo, así como su apartado A, fracción XXIX y su apartado B y 133º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 8º, 12º, 22º, 25º, 28º y 30º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1º, 2º, 11º, 17º, 24º, 25º, 26º y 30º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1º, 2º, 3º, 4º, 9º y 15º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; y 2º, 6º y 7º de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, consemientes a mis derechos de seguridad social, derecho de protección a la familia, derechos a los alimentos y derecho a que se respete mi dignidad.

Lo anterior es así toda vez que, el Juez impugnado sintetiza de forma incompleta en diversos incisos, marcados de la letra "a" a la letra "f" [fojas 37 a 39 de la sentencia recurrida], los argumentos y alegaciones que estima fueron vertidos por el suscrito, no obstante lo cual, es omiso en dar contestación a todos y cada uno de dichos argumentos que el mismo sintetizó, y que por ende es indudable que conocía perfectamente.



TRIBUNAL  
EN MATERIA  
CIVIL  
ATIVA DEL  
CIRCUITO  
O, D.F.

Así las cosas, debe hacerse notar al Juez Inferior que todas las resoluciones deberán de verse revestidas por los principios fundamentales de congruencia y exhaustividad, entendiéndose el primer principio como aquel que establece que la resolución no sólo debe ser congruente de manera interna, sino que también de manera externa, es decir que no sólo evitar contradicciones entre sí, sino que aunado a ello debe de haber concordancia entre lo demandado y lo resuelto, mientras que, por otro lado, el principio de exhaustividad exige que la autoridad debe realizar un examen minucioso respecto de todos los argumentos vertidos por el quejoso, sin omitir ninguno de ellos, de tal forma que pueda dar respuesta a cada uno de los argumentos.

Por tanto, el hecho de reducir su pronunciamiento a únicamente establecer que *"los artículos reclamados permiten que los beneficiarios de los trabajadores fallecidos obtengan los recursos económicos de una pensión por orfandad, incluso después de la mayoría de edad, siempre y cuando comprueben que están realizando estudios de nivel medio superior o superior; de ahí que se estime que los artículos 6º, 131, fracción I, 134, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respetan el derecho de seguridad social consagrado en el precepto constitucional y normas internacionales de las que se ha dado noticia."*, dejan de atender el resto de los conceptos de violación que hice valer, tales como los marcados con los incisos b), c), d), e) y f) que el Juez sintetizó, vulnera el principio de exhaustividad y

consecuentemente la congruencia externa que debe de tener contener su resolución.

Aunado a que debió de considerar y naturalmente contestar los argumentos esgrimidos en el sentido de que del estudio del procedimiento legislativo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se desprende que la finalidad de dicha reforma es otorgar protección integral a los trabajadores al servicio del estado y a sus familias, lo que implica la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentra expuesto, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida, argumento que no fue resuelto y que no queda válidamente resuelto mediante la resolución del A-Quo.

Consecuentemente, es inconcuso que el Juez debió de dar respuesta a todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda de amparo, de forma que se resolvieran todos los puntos de debate vertidos por el impetrante, máxime, cuando todos y cada uno de dichos argumentos estaban encaminados a probar la inconstitucionalidad e inconveniencia de las porciones normativas que se fundaron de esa forma, por estimarse violatorias de mis derechos humanos y garantías constitucionales, y que al no haberlo hecho de esta manera vulneró el principio de exhaustividad, traduciéndose en un veredicto incompleto al no establecer todas y cada una de las consideraciones por las cuales estima que mis razonamientos son improcedentes, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal.

TRIBUNAL  
EN MATERIA  
ACTIVADA  
RECUTIO  
D, D.F.

No omitiendo mencionar que en caso de que el Juez impugnado, en el supuesto de que considerara que no había necesidad de dar contestación a dichos argumentos, debió de fundar y motivar dicha determinación, lo cual en ningún momento.

Por lo que su Señoría deberá de revocar la sentencia recurrida por falta de exhaustividad en misma y en su lugar analizar los argumentos omitidos por el Juez de Distrito, así como los argumentos esgrimidos en el presente recurso y con base en ello determinar que los artículos 6, 131 fracción I, 134 son inconstitucionales e inconvenientes por vulnerar los derechos humanos y garantías sociales de seguridad social, seguridad jurídica, protección a la familia, derechos a los alimentos y derecho a la dignidad y por ende otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se prescinda de aplicar las porciones normativas reclamadas y se continúe proporcionando la pensión por orfandad hasta el momento en que el suscrito dentro de los límites razonables obtenga mi titulación y cédula profesional con efectos de patente para poder ejercer mi profesión.

TERCERO.- La fuente de este agravio es la consideración visible a fojas 49 de la sentencia en la que establece de manera literal lo siguiente:

"..., resultan inoperantes los conceptos de violación dirigidos a combatir que los artículos reclamados violan lo dispuesto en los numerales 1, 2, 11, 24, 25, 26 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 4 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 6 y 7° de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, toda vez que el quejoso no expone cuál derecho humano está en discusión, de ahí que sea insuficiente la sola afirmación en los conceptos de violación de que las normas reclamadas son inconvencionales."

Dicha consideración parte de una premisa falsa, y consecuentemente resulta ilegal la consideración del Juez de Distrito al establecer que resultan inoperantes los conceptos de violación antes referidos, en razón de que supuestamente el suscrito no expuso cual es el derecho humano que está en discusión, cuestión que resulta a todas luces ilógico e incongruente.



Lo anterior es así, toda vez que como su Señoría podrá advertir de las constancias procesales, mismas que gozan de valor probatorio pleno, en la hoja marcada con el arábigo 15 (quince), primer párrafo de mi escrito inicial de demanda manifesté lo siguiente:

RIBUNDA  
EN MATERIA  
LIMITATIVA DEL  
CIRCUITO.  
O, D.F.

"Es de destacarse que los derechos hasta aquí expuestos (derechos de seguridad jurídica, seguridad social, protección a la familiar y dignidad), se encuentran reconocidos también por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según se aprecia de manera enunciativa, más no limitativa, de lo siguiente: ..."

Asimismo en la hoja marcada con el arábigo 26 (veintiséis), último párrafo señalé lo siguiente:

"Por tanto, debe concluirse que los numerales 6, 131 fracción I, 134 y el artículo primero y décimo transitorio fracción VI, último párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son transgresores de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, seguridad social, protección a la familiar y mi dignidad previstos en los artículos 1°, 4°, 5°, 14°, 16° párrafo primero; 17° párrafo segundo; 26° A., 29°, 123° párrafos primero, segundo, así como su apartado A, fracción XXIX y su apartado B y 133° de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 8º, 12º, 22º, 25º, 28º y 30º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1º, 2º, 11º, 17º, 24º, 25º, 26º y 30º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1º, 2º, 3º, 4º, 9º y 16º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" adoptado en la Ciudad de San Salvador; y 2º, 6º y 7º de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, por no cumplir con la finalidad de la pensión por orfandad, que es que se auxilie a lo beneficiarios a atravesar la etapa de la vida económicamente inactiva, proporcionar los recursos económicos para que logren una profesión arte u oficio a la que se quieran dedicar y finalmente esto culmine en lograr obtener una profesión que sea su medio de subsistencia para poder realizar su plan de vida, y por ende prescinda las porciones normativas reclamadas y se me proteja contra su aplicación presente y futura."

De lo que clara y fácilmente se puede advertir que el suscrito mencioné de forma explícita que los artículos que se tildan de inconstitucionales e inconvenientes por medio del juicio de amparo, transgreden los derechos fundamentales de seguridad jurídica, seguridad social, protección a la familiar y mi dignidad previstos en los numerales 1, 2, 11, 24, 25, 26 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 4 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 6 y 7º de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias y el resto de las disposiciones contenidas en el párrafo aludido.

De manera que, deja de asistirle la razón al Juez impugnado, en virtud de que el suscrito, contrario a lo que establece el A-Quo, si mencioné de forma explícita cuales son los derechos humanos que se encuentran en discusión y que se encuentran plenamente administrados con las disposiciones normativas señaladas, en atención a lo cual resulta completamente infundada la consideración del Juzgador.

Por lo que, contrario a lo que establece el Juez, éste se encontraba obligado a estudiar los conceptos de violación también a la luz de los artículos que desestimó por considerarlos inoperantes, y en consecuencia debió concluir que los numerales 6, 131 fracción I, 134 y el artículo primero de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son transgresores de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, seguridad social, protección a la familiar y dignidad del suscrito por dejar de cumplir con el principio de previsión social incluido dentro del derecho a la seguridad social, así como por alejarse completamente de la finalidad de la norma tanto secundaria como



Suprema que es la protección integral a los trabajadores al servicio del estado y a sus familias, lo que implica la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentra expuesto, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida.

**CUARTO.-** Ahora bien, por cuanto hace al problema de inconstitucionalidad e inconveniencia que subsiste de los artículos impugnados, consistentes en los numerales 6, 131 fracción I, 134 y el artículo primero de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el suscrito estima pertinente señalar las consideraciones del A-Quo bajo las cuales determinó negar el amparo y protección de la justicia federal, tal razonamiento fue el siguiente:

➤ Estableció el Juez primitivo que los preceptos que se reclaman no resultan violatorios del artículo 123 de la Constitución Federal, ni de los diversos Instrumentos Internacionales, en virtud de que las normas reclamadas establecen el derecho a favor de los beneficiarios de gozar de las prestaciones de seguridad social que se generen, en caso de muerte del trabajador; pues disponen que los hijos del servidor público pueden gozar de una pensión por orfandad hasta los veinticinco años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, lo cual les permite madurar en sus capacidades física, intelectual y moral.



IBUNAT  
N MAT,  
TIVA D  
RCUITO.  
D.F.

➤ Determinó que las porciones normativas reclamadas permiten que los beneficiarios de los trabajadores fallecidos obtengan los recursos económicos de una pensión por orfandad, incluso después de la mayoría de edad, siempre y cuando comprueben que están realizando estudios de nivel medio superior o superior; de ahí que estime que los artículos 6°, 131, fracción I, 134, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respetan el derecho de seguridad social consagrado en el precepto constitucional y normas internacionales de las que se ha dado noticia.

➤ Señaló que los instrumentos de carácter internacional citados no maximizan el derecho de seguridad social que se estima vulnerado, al grado de considerar que la pensión de orfandad debe pagarse a los beneficiarios hasta que concluyan los trámites de titulación y cuenten con la cédula profesional con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de licenciatura.

➤ Citó como apoyo a su decisión la jurisprudencia (III Región) 5o. J/9 (10a.), definida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de

la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo 47 II, marzo de dos mil catorce, página 1361, del tenor siguiente: "CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. TRATÁNDOSE DEL DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL A UNA PENSIÓN, LAS NORMAS INTERNAS GARANTIZAN UNA MAYOR EFICACIA PROTECTORA QUE EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y EL NUMERAL 9 DEL PACTO DE SAN SALVADOR, POR TANTO, EN ESA HIPÓTESIS ES INNECESARIO EJERCER DICHO CONTROL."

- Consideró inoperantes por insuficientes los conceptos de violación dirigidos a combatir que los artículos reclamados violan lo dispuesto en los numerales 1, 2, 11, 24, 25, 26 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 4 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 6 y 7° de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, basándose en que el suscrito no había expuesto cuál derecho humano estaba en discusión, consideración que se combate en el agravio que antecede y que como se mencionó con antelación es infundado por las razones y consideraciones allí expuestas.

RECIBI  
EN MAT  
ATIVA DE  
RCUITO  
J. D.F.

Consecuentemente estimo que los artículos reclamados resultan acordes con la Constitución Federal y con los Tratados Internacionales analizados, razón por la cual negó el amparo y protección de la Justicia Federal.

Resulta conducente resaltar el argumento vertido por el suscrito en mi escrito inicial de demanda en el que manifesté lo siguiente:

"Los numerales 6, 131 fracción I, 134 y el artículo primero y décimo transitorio fracción VI, último párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son transgresores de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, seguridad, social, protección a la familiar y mi dignidad previstos en los artículos 1°, 4°, 5°, 14°, 16° párrafo primero; 17° párrafo segundo, 26° A., 29°, 123° párrafos primero, segundo, así como su apartado A, fracción XXIX y su apartado B y 133° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 8°, 12°, 22°, 25°, 28° y 30° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1°, 2°, 11°, 17°, 24°, 25°, 26° y 30° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1°, 2°, 3°, 4°, 9° y 15° del Protocolo Adicional a la

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" adoptado en la Ciudad de San Salvador; y 2º, 6º y 7º de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, por no cumplir con la finalidad de la pensión por orfandad, que es que se auxilie a lo beneficiarios a atravesar la etapa de la vida económicamente inactiva, proporcionar los recursos económicos para que logren una profesión arte u oficio a la que se quieran dedicar y finalmente esto culmine en lograr obtener una profesión que sea su medio de subsistencia para poder realizar su plan de vida..."

Lo anterior fue así basando en los siguientes razonamientos:

- ❖ La seguridad social no sólo abarca a los asegurados o trabajadores, sino que también está dirigida a sus familiares, por lo que a éstos tampoco se les puede reducir o restringir.
- ❖ Del estudio del procedimiento legislativo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se desprende que la finalidad de dicha reforma es otorgar protección integral a los trabajadores al servicio del estado y a sus familias, lo que implica la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentra expuesto, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida.
- ❖ Los derechos de seguridad social y en específico las prestaciones de pensiones de viudedad, concubinato, **orfandad** y ascendencia, no son prestaciones gratuitas, sino un derecho que se genera con los recursos que otorga durante toda la vida laboral del trabajador.
- ❖ La finalidad de la pensión por orfandad tiene como objeto primordial la de garantizar la subsistencia de sus dependientes económicos o núcleo familiar (beneficiario).
- ❖ Para garantizar la subsistencia de la familia (hijos) en caso de fallecimiento del trabajador, es necesario que se les otorgue los recursos económicos para que se encuentren en posibilidad de transitar por aquella etapa de la vida económicamente inactiva y con ello logren una profesión arte u oficio a la que se quieran dedicar.
- ❖ Así las cosas, la pensión por orfandad tiene por propósito el de garantizar el bienestar y protección integral del beneficiario, protegiéndole contra el



TRIBUNAL  
IN MATIA  
ATIVA DE  
RCUITO.  
), D.F.

eventual fallecimiento de alguno de sus progenitores, de forma que asegure al beneficiario menor de edad, o, en su caso el mayor de edad que continúe estudiando y no despliegue ningún trabajo remunerado, el atravesar por una etapa económicamente inactiva en la que se alleguen de los recursos necesarios que les darán una base para desarrollar los planes de vida para que llegado el momento de concluir sus estudios el o los beneficiarios puedan incorporarse a la vida laboral de manera eficaz, procurando en todo momento el mejoramiento de nivel de vida de éste.

- ❖ La prestación de una pensión por orfandad comparte teleológicamente el mismo objetivo que la institución de los alimentos, puesto que tienen como finalidad la de asegurar al beneficiario o acreedor el recurso económico necesario y proporcionarle los recursos necesarios para auxiliar a atravesar esa etapa económicamente inactiva, con la visión de que el beneficiario o acreedor se encuentren en aptitud de concluir aquella etapa educativa en la que se encuentran y posteriormente se pueda valer por el mismo, sin que pase desapercibido que tienden a cubrir las mismas necesidades.
- ❖ Que al existir dicha equiparación teleológica es prudente aseverar que al igual que la institución de los alimentos, la pensión por orfandad debe de comprender los gastos necesarios para proporcionarles una educación formalizada, es decir, la formación necesaria para desempeñar un oficio, arte o profesión, adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales, que en el caso en concreto se traduce en la ayuda para la obtención del título y posteriormente cédula profesional con efectos de patente que permita al suscrito ejercer mi profesión de manera plena.
- ❖ Resulta irrisorio pensar que cualquier estudio profesional con la consecuente titulación y tramitación de la cédula profesional se puede realizar antes de cumplidos veinticinco años de edad, puesto que resulta un hecho notorio que debido a las circunstancias actuales por las que atraviesa nuestro país es poco factible que una persona culmine sus estudios profesionales de manera integral, es decir adquiera el título o cédula para ejercer, antes de los veinticinco años.
- ❖ No proporcionar la pensión implicaría mermar las posibilidades finalizar los estudios profesionales con la natural consecuencia de dificultar la incorporación a una vida laboral efectiva, justa y acorde a la profesión que elegí como medio para subsistir y realizar mi plan de vida, puesto que restringiría una inversión económica y humana de años, encaminada a la consecución de la formación necesaria para desempeñar una profesión u



IBU  
NMA  
TIVA  
RCUT  
, D.F.

oficio, que se vería fatalmente frustrada por una interrupción del apoyo económico en un momento en el que la misma todavía no puede dar sus frutos esperados, que dependen en gran medida de la conclusión de los estudios emprendidos y de la obtención del título y cédula profesional para poder ejercer la profesión, con lo que se dejaría de cumplir con el propósito de la norma secundaria y se vulneraría el derecho a una integra protección de la seguridad social.

- ❖ Escaso efecto práctico tendría, en las circunstancias actuales, atribuir legalmente el derecho a la pensión de orfandad los hijos del beneficiario para obtener lo necesario para estar en aptitud de desempeñar una profesión si el límite infranqueable de dichas prestaciones fuera la edad de veinticinco años. Pues la prevalencia rígida de la regla temporal de los artículos 6, 131 fracción I, 134 y el artículo primero y décimo transitorio fracción VI, último párrafo, sustraería, en muchísimas ocasiones, toda virtualidad práctica al derecho a recibir lo necesario para tener una educación congruente culminado en lograr obtener una profesión que sea su medio de subsistencia para poder realizar su plan de vida, lo que a la luz de los intereses y derechos de seguridad, social, protección a la familiar, y mi dignidad, debe de justificar la prolongación de la pensión por orfandad a fin de procurar el mejoramiento del nivel de vida del beneficiario.

RECEIVED  
EL WATER  
ALTA DEL  
RUBIO  
D.F.

De tal suerte que no proveer de los recursos necesarios para culminar la etapa estudiantil que me permita obtener un trabajo y por consiguiente un salario acorde a mi profesión contravendría la finalidad de la pensión por orfandad que es la de garantizar la subsistencia y procurar el mejoramiento del nivel de vida de sus dependientes económicos o núcleo familiar (beneficiario), con lo que se trasgredirían mis derechos de seguridad jurídica, seguridad, social, protección a la familiar y mi dignidad contenidos en los artículos 1º, 4º, 5º, 14º, 16º párrafo primero; 17º párrafo segundo, 26º A., 29º, 123º párrafos primero, segundo, así como su apartado A, fracción XXIX y su apartado B y 133º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 8º, 12º, 22º, 25º, 28º y 30º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1º, 2º, 11º, 17º, 24º, 25º, 26º y 30º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1º, 2º, 3º, 4º, 9º y 15º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" adoptado en la Ciudad de San Salvador, y 2º, 6º y 7º de la Convención interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.

Argumentos que, como mencione en el agravio que antecede no fueron estudiados ni resueltos por el A-Quo bajo la óptica de los principio *pro homine* y de mayor beneficio, que se deben de considerarse a fin de determinar si los numerales de la norma general que se impugnan son inconstitucionales e inconvencionales.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis P. XXXVIII/90, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, t. V, Octava Época, de Enero a Junio de 1990, de rubro y texto siguiente:

**"AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.** Para determinar el precepto que se combate, tratándose de amparo contra leyes, debe atenderse no sólo al capítulo de actos reclamados sino al estudio integral de la demanda y de manera especial a los conceptos de violación que se aduzcan, pues es atendiendo a los razonamientos que se hacen valer como puede determinarse cuál es la norma que se ataca de inconstitucional."

Por otro lado, resulta necesario precisar que del contenido normativo de los artículos que se tildan de inconstitucionales e inconvencionales, a saber, los artículos 6, 131 fracción I, 134 y el artículo primero transitorio, y que el A-Quo ~~expuso~~ respetan el derecho de seguridad social consagrado en el precepto constitucional y normas internacionales de las que se ha dado noticia por J.D.E. Considerar que permite al beneficiario madurar en sus capacidades física, intelectual y moral, se deriva una prerrogativa que se activa a causa de la muerte del trabajador y que consiste en proporcionar una pensión por orfandad a los hijos del mismo hasta la edad de dieciocho años o bien hasta veinticinco años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo. Empero, dichas disposiciones establecen como límite infranqueable la edad de veinticinco años para poder gozar de aquella prestación.

Sin embargo, debe precisarse que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), una prerrogativa a favor de los beneficiarios ante al riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora que tiende a proteger la seguridad y bienestar de la familia y que para pronta referencia se transcribe:

**"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin**

13  
contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

...B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

...XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

...a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte."

De igual forma cabe destacar que en la iniciativa de reforma constitucional, a la cual se le dio lectura en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el siete de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, en la parte que interesa para resolver este asunto es del tenor siguiente:

**"La adición que se propone al texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como los de sus familiares; jornada máxima, tanto diurna como nocturna, descansos semanales, vacaciones, salarios, permanencia en el trabajo, escalafón para los ascensos, derecho para asociarse, uso del derecho de huelga, protección en caso de accidentes y enfermedades, así profesionales como no profesionales, jubilación, protección en caso de invalidez, vejez y muerte, centros vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, así como las medidas protectoras, indispensables para las mujeres durante el período de la gestación, en el alumbramiento y durante la lactancia".**

R. A. TAL  
E. MATERIA  
INICIATIVA DEL  
E. CUITO.  
K. D.F.

En el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo de esa Cámara, al cual se le dio lectura el diez de diciembre siguiente, en lo que interesa se dice:

**"2. Las comisiones dictaminadoras consideran absolutamente justificadas las adiciones al artículo 123, materia de la iniciativa. Siguiendo la tradición establecida por el Constituyente de 1917 y a fin de enriquecer las garantías sociales que nuestra Constitución consagra, se elevan a la categoría de norma constitucional disposiciones que tienden a garantizar el respeto de los derechos inherentes a los servidores del Estado, limitando el poder público en sus relaciones con ellos a procurar el mejoramiento del nivel de vida**

de los trabajadores y sus familiares y adoptar bases mínimas de seguridad social con el mismo propósito".

En la discusión del dictamen de referencia intervino el senador Rodolfo Brena Torres quien en lo interesante manifestó lo siguiente:

"...Actualmente, en mil novecientos cincuenta y nueve, la revolución establece constitucionalmente garantías mínimas a los servidores del Estado; garantías que podrán ampliarse, pero nunca restringirse, por posteriores leyes secundarias que emanen del Congreso de la Unión..."

En el dictamen elaborado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al que se le dio lectura en la sesión ordinaria celebrada el veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, entre otras cosas, se razonó lo siguiente:



RICU  
EN M.  
LATIVA  
IRCUTI  
O, D.F.

"Al efecto, el señor presidente de la República indica que ha sido de su preocupación mantener y consolidar los ideales revolucionarios, cuyo legado ha recibido con plena conciencia y responsabilidad por todo lo que representa para el progreso de México dentro de la justicia social, que los trabajadores al servicio del Estado no habían disfrutado con plenitud de todas las garantías sociales consagradas en la Constitución General de la República para los trabajadores del campo y de la industria privada; que si bien es cierto que es de distinta naturaleza la relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus patrones, respecto de los servicios públicos con el Estado, también lo es que el trabajo no constituye una simple mercancía, sino que forma parte esencial de la dignidad del hombre y que la adición que propone el texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y consagra las bases mínimas de protección social que aseguran, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como los de su familia...

Es pues, de gran trascendencia la iniciativa que se nos presenta a estudio y consideramos que debe ser aprobada por esta asamblea. Pero estimamos que es indispensable dejar precisado, como lo hace el señor Presidente en su exposición de motivos, que las adiciones y reformas que se proponen al artículo 123 se refieren a los trabajadores al servicio del Estado, dentro de cuya denominación de 'trabajadores' se comprenden a todos los que tienen una designación legal como tales, cualesquiera que sea la forma de ella, por lo que motiva que se hagan algunas modificaciones por estas comisiones unidas, al texto



14

de la iniciativa presidencial, como a las llevadas a cabo por el Honorable Senado de la República. -- En la fracción XI, que trata de la seguridad social se usa en sus incisos b, d, e y f, el concepto 'empleo público', que se presta a diversas interpretaciones, y, congruentes con la exposición de motivos de la iniciativa presidencial proponemos que se sustituya ese concepto por el de 'trabajadores'; en esas condiciones, queda claramente establecido que los beneficios a favor de los servidores públicos son para todos aquéllos que se encuentren al servicio del Estado, operando dicha sustitución en las fracciones que usan el término 'empleados'. -- Consecuentemente con lo expresado en el párrafo anterior, no estimamos adecuado el empleo de la palabra 'empleados' que agregó al enunciado del apartado B, el Senado de la República, el cual seguramente lo incluyó por haberse usado ese vocablo en los incisos citados de la fracción XI de ese apartado de la iniciativa presidencial. Respetando, de consiguiente, el resto de la redacción propuesta por el Senado, deben quedar, en opinión de esa comisión redactados los enunciados que se mencionan de la siguiente manera...".

Por lo que de la lectura del precepto constitucional preinserto y del proceso legislativo del cual deriva se advierte lo siguiente:

1. JUN 20 1964  
I. MATL  
RECEIVED DE  
CIRCUITO.  
DO, D.F.

- a) Que en él se instituyeron no sólo las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino también el principio de previsión social que obliga establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a la familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos.
- b) Se previó a nivel constitucional la protección para dichos trabajadores y sus familiares en caso de invalidez, vejez y muerte.
- c) Se elevaron a rango constitucional las disposiciones orientadas a procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares y adoptar bases mínimas de seguridad social con igual propósito.
- d) Las garantías sociales establecidas en el precepto en comento podrán ampliarse, pero nunca restringirse.

De acuerdo a todo lo anterior, se establece que la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, como garantía social constitucionalmente reconocida, también está dirigida a sus familiares; por ello, a éstos tampoco se les puede reducir o restringir la garantía de referencia.

Sin que sean de menor importancia que de la exposición de motivos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se desprende que el fin que persigue dicha reforma es garantizar que se beneficie con una mayor amplitud a los trabajadores y a sus familias, sin que pase desapercibido que el objetivo primordial y razón de existir del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es otorgar protección integral a los trabajadores al servicio del Estado y sus familias.

De igual forma, solicito que los preceptos normativos de los Tratados internacionales que el suscrito esgrimi en mi escrito inicial de demanda sean tomados en cuenta, los cuales por economía solicito se tengan por aquí reproducidos como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias.

Así, el suscrito adujo que los numerales 6, 131 fracción I, 134 y el artículo primero y décimo transitorio fracción VI, último párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son transgresores de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, **seguridad social (principio de previsión social)**, **protección a la familiar** y **mi dignidad** previstos en los artículos 1°, 4°, 5°, 14°, 16° párrafo primero; 17° párrafo segundo, 26° A., 29°, 123° párrafos primero, segundo, así como su apartado A, fracción XXIX y su apartado B y 133° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 8°, 12°, 22°, 25°, 28° y 30° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1°, 2°, 11°, 17°, 24°, 25°, 26° y 30° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1°, 2°, 3°, 4°, 9° y 15° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" adoptado en la Ciudad de San Salvador; y 2°, 6° y 7° de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, por no cumplir con la finalidad de la pensión por orfandad, que es que se auxilie a lo beneficiarios a atravesar la etapa de la vida económicamente inactiva, proporcionar los recursos económicos para que logren una profesión arte u oficio a la que se quieran dedicar y finalmente esto culmine en lograr obtener una profesión que sea su medio de subsistencia para poder realizar su plan de vida.

Y en las consideraciones que se han venido plasmando, podemos arribar a la conclusión de que los numerales que se tildan de Inconstitucionales restringen el derecho de los hijos a recibir la pensión por orfandad derivada de la muerte del trabajador cuando éste cumpla la edad de veinticinco años de edad, no obstante de que la Norma Suprema prevé la protección integral que otorgue tranquilidad y bienestar para dichos trabajadores y sus familiares en caso de invalidez, vejez y muerte, además de que impone una obligación al legislador ordinario para que eleve cualquier norma de carácter general esté orientada a procurar el

mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares y adoptar bases mínimas de seguridad social con igual propósito.

Lo anterior, encuentra sus justificación en que, como se mencionó con antelación, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional, no sólo se contienen las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino también deriva el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentra expuesto, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida.

El derecho a recibir una pensión por orfandad como consecuencia de la muerte del trabajador, constituye uno de los propósitos fundamentales del principio de la previsión social que se encuentra bien definido y garantizado en la norma constitucional, así como en los tratados internacionales que invoqué.

Así, conforme a dichos preceptos, la muerte de un trabajador pensionado por incapacidad permanente total o un trabajador en activo (siempre que hayan satisfecho los requisitos previstos en el inciso g), por causas ajenas a las que generaron la incapacidad o al servicio, genera el derecho a recibir una pensión por orfandad, y su pago iniciará a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que haya originado tal pensión (artículo 130 de la ley de la materia).

IBUNAL  
N MATEF  
TIVA DE  
RCUITO. Luego entonces, las porciones normativa impugnadas en el juicio  
I.D.E. binstancial contravienen la garantía de seguridad social y el principio de la  
previsión social prevista en la nuestra Constitución Federal y en los Instrumentos Internacionales, debido a que restringen el derecho a percibir íntegramente la pensión por orfandad hasta cumplir con su objetivo que es el de proveer de los recursos necesarios para culminar la etapa estudiantil que me permita obtener un trabajo y naturalmente merman la posibilidad de que el suscrito llegue a percibir un salario acorde a mi profesión vulneraría la finalidad de la pensión por orfandad que es la de garantizar la subsistencia de sus dependientes económicos o núcleo familiar (beneficiario).

Pues como ya se mencionó, no hacerlo implicaría mermar las posibilidades finalizar los estudios profesionales con la natural consecuencia de dificultar la incorporación a una vida laboral efectiva que no cumpliría con la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentra expuesto, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida, puesto que restringiría una inversión económica y humana de años,

encaminada a la consecución de la formación necesaria para desempeñar una profesión u oficio, que se vería fatalmente frustrada por una interrupción del apoyo económico en un momento en el que la misma todavía no puede dar sus frutos esperados, que dependen en gran medida de la conclusión de los estudios emprendidos y de la obtención del título y cédula profesional para poder ejercer la profesión.

Así, el disfrute del derecho de la pensión por orfandad coadyuva a hacer efectiva la garantía de la previsión social, orientada a otorgar tranquilidad y bienestar de los familiares del trabajador o pensionado muerto, mejorando el nivel de vida de los hijos.

No obviando manifestar, que como se hizo referencia con anterioridad, los beneficios de las pensiones por orfandad no son una concesión gratuita o generosa, sino que constituye un seguro que se activa con la muerte del trabajador o pensionado, y deriva directamente de las aportaciones que éste haya hecho por determinado número de años de trabajo productivo y que reitero tiene como finalidad la de garantizar la subsistencia de los beneficiarios del trabajador después de acaecida su muerte otorgándoles tranquilidad y bienestar personal, procurando en todo momento el mejoramiento del nivel y calidad de vida.

De tal suerte que no existe una justificación constitucional por la cual se restrinja y limite de manera infranqueable la oportunidad de recibir la pensión por orfandad mientras los hijos se encuentren estudiando estudios acordes a su edad y sus circunstancias personales, sin obviar, que ello no pone en riesgo de ninguna manera la viabilidad financiera de las pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

[REDACTED] que invoca en apoyo a su decisión, consistente en la jurisprudencia (III Región) 5o. J/9 (10a.), definida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo 47 II, marzo de dos mil catorce, página 1361, del tenor siguiente: "CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. TRATÁNDOSE DEL DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL A UNA PENSIÓN, LAS NORMAS INTERNAS GARANTIZAN UNA MAYOR EFICACIA PROTECTORA QUE EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y EL NUMERAL 9 DEL PACTO DE SAN SALVADOR, POR TANTO, EN ESA HIPÓTESIS ES INNECESARIO EJERCER DICHO CONTROL", no es aplicable al caso en concreto, en razón de que el tema discutido en dicha jurisprudencia es el medio idóneo para controvertir la resolución concesoria de una pensión, no así la

constitucionalidad y convencionalidad de las porciones normativas que se impugnaron. <sup>2</sup>

En este orden de ideas, se colige que los artículos que se reclaman de inconstitucionales, esto es los numerales 6, 131 fracción I, 134 y el artículo primero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al restringir el derecho a percibir la pensión por orfandad hasta los veinticinco años sin que importe si continúan estudios acorde a su edad y circunstancias, contraviene la garantía de seguridad social y el principio de la previsión social, contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional.

Por ende, en las consideraciones relatadas con anterioridad, debe establecerse que no le asiste la razón al Juez de Distrito al considerar que las normas impugnadas no violentan mis derechos humanos y garantías constitucionales de dignidad, alimentos, seguridad social, seguridad jurídica y protección a la familia, por lo que esta Suprema Corte de Justicia deberá revocar el fallo recurrido, en la parte en la cual se había negado el amparo solicitado en contra de los preceptos mencionados y, en su lugar, conceder el mismo, y como resultado de ello y atendiendo a los principios de mayor beneficio y *pro homine* se conceda al quejoso el amparo solicitado para el efecto de que el numeral declarado inconstitucional no se le aplique en el presente ni en lo futuro.

RIBUN  
EN M. RI-

ATIV DE  
IRCUTO

Asimismo y como vía de consecuencia se deje sin efecto su acto de aplicación consistente en la suspensión de la pensión por orfandad a favor del suscrito y se ordene la devolución de las cantidades que la parte quejosa le correspondan, desde la fecha en que le hayan sido retenidas por dicho concepto, consistente en la pensión por orfandad que se venía proporcionando al suscrito por el 80% (ochenta por ciento) de la pensión actual que equivale a la cantidad de

pago que fue suspendido a partir del mes de julio del presente año, tal y como se advierte de las constancias que remitió la autoridad responsable, Jefa de Unidad Administrativa de Prestaciones Economicas Número 5, ambos de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ordenándole que deberá pagar al suscrito las mensualidades que ha dejado de pagar desde el mes de julio y hasta el momento que se dicte la resolución correspondiente y las subsecuentes hasta el momento en que el suscrito obtenga el título profesional y la cédula con efectos de patente, que en un tiempo promedio se obtiene en un año posteriores a la conclusión de los estudios profesionales, a fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 317, con número de registro 1005115, emitida por el Pleno de ésta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3989 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, t. II, Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos, Novena Época, del apéndice de 2011, de rubro y texto siguiente:

**"AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.**

El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuere negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no



SECRETARÍA DE JUSTICIA  
FEDERATIVA  
D.F.

existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro."

Al caso se cita en apoyo el criterio emitido por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable la Tesis 2a. XVII/2001, localizable en la página 189 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, t. XIII, de Marzo de 2001, con número de registro 190224, de rubro y texto siguiente:



BUNAI  
IMATE  
IVA D  
CUITC  
D.F.

**"AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE LA EJECUTORIA PROTECTORA RESPECTO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN.**

Cuando los efectos de una sentencia de amparo se extienden hasta los actos de aplicación de la norma declarada inconstitucional, debe entenderse no sólo en cuanto a los actos de aplicación reclamados en la demanda sino también respecto de aquellos que aunque no se precisaron, son una consecuencia directa e inmediata de la aplicación de la norma, pero no deben incluirse aquellos cuya restitución depende de la interpretación de preceptos que conforman el contexto legal del ordenamiento al cual pertenece la disposición declarada inconstitucional y que no fueron materia de la litis en el juicio de amparo, pues para determinar en ejecución los alcances de la sentencia, no es permisible hacer la interpretación de preceptos diversos al impugnado, cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad no fue puesta a la consideración de la potestad judicial en el juicio de amparo, sino que la restitución del derecho del quejoso, para volverlo al estado en que se encontraba hasta antes de la violación constitucional reclamada, debe realizarla la autoridad responsable dentro del marco legal al que pertenece la norma impugnada y no en contravención a él."

Finalmente no omito mencionar que en el presente caso opera la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79 de la Ley de la Materia con base en la tesis 2a. XCV/2014 (10a.) emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, visible en la página 1106 del *Semanario Judicial de la Federación y su gaceta*, t. I, Libro 11, Décima Época, de Octubre de 2014, de rubro y texto siguiente:

**"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS.** Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables."

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Ustedes Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la comedia y atentamente solicito:

**PRIMERO:** Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, con la personalidad con la que me ostento, interponiendo en tiempo y debida



forma, **RECURSO DE REVISIÓN**, en contra de la sentencia pronunciada en la audiencia constitucional de fecha trece de Noviembre de dos mil diecisiete.

**SÉGUNDO:** Una vez que sean estudiados los agravios expuestos, se dicte resolución en la que se declare la procedencia del presente Recurso de Revisión y en tal virtud otorgar la concesión del amparo y protección de la justicia federal para los efectos precisados con anterioridad.

ATENTAMENTE



REUNIA  
EN MAT  
ATIVA DE  
IRCUITO.  
O.D.F.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



ORIGINAL CHICOPAL

P. 62  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO  
EN MATERIA ADMINISTRATIVA  
DEL PRIMER CIRCUITO

Procuraduría Fiscal de la Federación  
Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos  
Dirección General de Amparos Contra Leyes  
Dirección de Amparos Contra Leyes "A"

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

OFICIO: 529-III-DACLA-(KMC)- 36228  
MÉXICO, D.F.  
FOLIO: 1612775

QUEJOSO: [REDACTED]

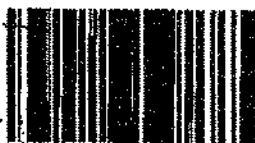
AMPARO EN REVISIÓN: 578/2017

JUICIO DE AMPARO: 1096/2017

ASUNTO: SE INTERPONE RECURSO DE  
REVISIÓN ADHESIVA

VENCIMIENTO: 02 DE ENERO DE 2018.

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2017.



171212N0271

ARTÍCULO 6, 131, FRACCIÓN I, 134 Y DÉCIMO  
TRANSITORIO, FRACCIÓN VI, ÚLTIMO  
PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN

SE ADEJAN  
11 TANTOS  
PRESIDENTE  
RECURSO

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO  
EN MATERIA ADMINISTRATIVA  
DEL PRIMER CIRCUITO  
D.F.

H. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN  
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER  
CIRCUITO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD  
DE MÉXICO.

AV. BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS NO.  
2321, TORRE A, PISO 1, COL. TLACOPAC SAN  
ANGEL, DELEG. ALVARO OBREGON CIUDAD DE  
MÉXICO, C.P. 01760.

LIC. TANIA MIDORI DEL VELAR ARANDA, actuando como delegada de la autoridad responsable Presidente de la República, habiendo sido designada con tal carácter en el informe justificado contenido en el oficio 529-III-DACLA-(KMC)-36097, de fecha 22 de septiembre de 2017, mismo que fue reconocido en el considerando CUARTO de la sentencia constitucional, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, reiterando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones relativas al presente asunto las oficinas de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur número 795, Planta Baja, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, en esta Ciudad de México, con el debido respeto comparezco y expongo:

El día 12 de diciembre de 2017, fue notificada en esta Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, el oficio 15820/2017, dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el acuerdo mediante el cual ese H. Tribunal Colegiado, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa en contra de la sentencia de fecha 13 de noviembre de 2017, por lo que la suscrita autoridad a fin de cumplir con el término de 5 días para adherirse al recurso de revisión de la quejosa, el 19 de diciembre de 2017, acudió a las oficinas de correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa en la Ciudad de México a presentar el recurso de revisión adhesiva respectivo.

No obstante lo anterior y en virtud de que ese H. Tribunal Colegiado se encuentra en periodo vacacional el cual transcurre del 18 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018, la suscrita autoridad presenta el recurso de revisión adhesiva en fecha 02 de enero de 2018, por lo que estando en tiempo y forma, se manifiesta lo siguiente:

Que por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley de Amparo, vengo a interponer RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA de conformidad al acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2017, por medio del cual ese H. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la

Ciudad de México, tuvo por admitido el recurso de revisión interpuesto por el quejoso dentro del juicio de amparo al rubro citado, en contra de la sentencia constitucional dictada por el C. Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y en la cual se determinó **SOBRESEER** y **NEGAR** en el juicio de garantías que nos ocupa.

### LEGITIMACIÓN PROCESAL

En primer término conviene tener presente lo señalado por el primer párrafo del artículo 9 de la Ley de Amparo, y que es del tenor literal siguiente:

"Artículo 9.- Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos."

Como se advierte del primer párrafo del artículo 9 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables pueden ser representadas en el juicio de amparo, asimismo podrán, mediante oficio, acreditar delegados.

Así, esta figura de los delegados, en términos del propio artículo recién transcrito, podrá realizar lo siguiente:

- Realizar promociones;
- Concurrir a las audiencias;
- Rendir pruebas;
- Formular alegatos; y,
- **Interponer los incidentes y recursos previstos en la Ley de Amparo.**

Por lo tanto, los delegados de las autoridades responsables (incluyendo a los delegados del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público), como es el caso, pueden interponer los recursos que establece la propia Ley de Amparo, pues con la reforma que sufrió el artículo 9 de la Ley de Amparo el Legislador ha otorgado dicha facultad a los delegados.

Confirma lo anterior, el criterio sustentado por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de reclamación 00035/2006-PL y 00036/2006-PL en las sesiones de fechas 01 y 03 de marzo de 2006, respectivamente.

En virtud del criterio anterior, al momento de señalar autorizados o delegados, el quejoso o la autoridad responsable, respectivamente, delegan las facultades procesales que prevé la ley, para que éstos la ejerzan y, además, la legitimación para actuar deviene de la voluntad del quejoso (igual aplica para la autoridad responsable) al señalarlo como autorizado.

Aún más, son tan fundados nuestros agravios que, incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis XXIX/2006, señaló que los delegados de las autoridades responsables si pueden interponer los incidentes y recursos que prevé la Ley de Amparo.

El criterio que se señaló es del rubro y texto siguientes:

**DELEGADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. TIENEN FACULTADES PARA PROMOVER LOS INCIDENTES Y LOS RECURSOS PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA (INAPLICACIÓN**

62  
107TRIBUNAL  
EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA DEL  
PRIMER CIRCUITO.  
D.F.

DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J. 9/2004).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 9/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 129, sostuvo que las facultades conferidas a los delegados de las autoridades responsables para rendir pruebas, formular alegatos y hacer promociones debían limitarse a la audiencia constitucional. Sin embargo, con motivo de la reforma al primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2005, resulta inaplicable el criterio jurisprudencial referido, para el efecto de considerar que los delegados designados por las autoridades responsables no sólo pueden presentar promociones, rendir pruebas y formular alegatos en cualquier etapa del procedimiento, ya sea dentro o fuera de la audiencia constitucional, sino que también están facultados para promover los incidentes y los recursos previstos en la Ley citada.

Asimismo, resulta plenamente aplicable por analogía la jurisprudencia 2ª./J. 191/2009 emitida la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 347/2009, en la cual resolvió lo siguiente:

**RECURSO DE REVISIÓN. EL DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DESIGNADO POR LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA EN EL JUICIO DE AMPARO, TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUÉL A NOMBRE DE DICHO FUNCIONARIO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 19 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTES ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 18 DE MARZO Y 17 DE ABRIL DE 2009).** Los preceptos legales citados establecen que el Presidente de la República puede ser representado en todos los trámites establecidos en la Ley de Amparo por conducto del Procurador General de la República y los Secretarios de Estado, y que las demás autoridades responsables, salvo los órganos legislativos Federal, de los Estados y del Distrito Federal, no pueden ser representados en ese procedimiento constitucional, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en la Ley citada. Esta última atribución alcanza también al Presidente de la República, porque el legislador confirió esa prerrogativa a todas las autoridades responsables sin excepción alguna. En ese tenor, el delegado del Presidente de la República designado por la autoridad que lo representa en el juicio de amparo está legitimado para interponer a nombre de aquél el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley de Amparo, toda vez que las actuaciones del citado representante surten efectos como si las llevara a cabo el propio titular del Ejecutivo Federal.

Contradicción de tesis 347/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Cuarto y Quinto, ambos del Octavo Circuito. 28 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.

Tesis de jurisprudencia 191/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de noviembre de dos mil nueve.

Entonces, como se advierte del criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los delegados de las autoridades responsables sí tienen facultades para interponer los incidentes y recursos que prevé la Ley de Amparo.

Toda vez que mediante oficio 529-III-DACLA-(KMC)-36097, de fecha 22 de septiembre de 2017, se rindió informe justificado respecto de la demanda, en los que fui designada con el carácter de delegada del C. Presidente

de la República, en términos del artículo 9 de la Ley de amparo, se debe tener a la suscrita ~~interponiendo~~ el presente recurso de revisión adhesiva.

### PROCEDENCIA DEL RECURSO

En términos de lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley de Amparo, el presente recurso de revisión es procedente, en virtud de que el mismo se adhiere al recurso de revisión interpuesto por la quejosa, ya que la resolución por la cual el Juzgador determinó SOBRESEER y NEGAR en el presente juicio de garantías fue favorable a los intereses de la suscrita autoridad.

En efecto, el artículo 82 de la Ley de Amparo señala:

"Artículo 82.- La parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; la adhesión del recurso sigue la suerte procesal de este."

Ahora bien, el presente recurso de revisión es procedente en virtud de que en la sentencia de fecha 13 de noviembre de 2017, dictada por el C. Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó SOBRESEER y NEGAR en el juicio de amparo contra actos del Presidente de la República y otras autoridades.

Asimismo, debe señalarse que el presente recurso de revisión adhesiva resulta por demás procedente al interponerse por la delegada de la autoridad responsable C. Presidente de la República, en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo.

### OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN

De conformidad con lo previsto por el artículo 82 de la Ley de Amparo la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses podrá adherirse al recurso de revisión interpuesto por el recurrente dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso.

En el caso particular, el presente recurso de revisión resulta oportuno en virtud de que el acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2017, por medio del cual ese H. Tribunal Colegiado, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, fue notificado a la suscrita autoridad, el día 12 de diciembre de 2017.

En este orden de ideas, el presente recurso de revisión adhesiva resulta oportuno, en virtud de que el término de cinco días a que se refiere el artículo 82 de la Ley de Amparo, fenece el día 03 de enero de 2018, tomando en consideración que son inhábiles los días:

- Los días 16, 17, 23, 24, 30, 31 de diciembre de 2017, por corresponder a sábado y domingo,
- Los días 25 de diciembre de 2017 y 01 de enero de 2018, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo.

Antes de entrar al análisis de los agravios hechos valer en el presente recurso, es importante señalar que la autoridad responsable aquí recurrente toma en consideración lo vertido por los Tribunales Colegiados de Circuito en su tesis aislada, de la séptima época que a la letra dice:



IBUNAL  
N MATERIA  
ATIVA DEL  
RCUITO.  
D.F.CORTE DE  
LA NACION

**“REVISION ADHESIVA. QUIEN LA HACE VALER PUEDE EXPRESAR AGRAVIOS TENDIENTES NO SOLO A MEJORAR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EN LA PARTE RESOLUTIVA QUE LE FAVORECE, SINO TAMBIEN A IMPUGNAR LAS DE LA PARTE QUE LE PERJUDICA.** La adhesión al recurso de revisión prevista por el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, tiene por finalidad que quien obtuvo sentencia favorable pueda expresar agravios que integren la litis de segunda instancia, cuando su contrario a través del recurso de revisión impugnó la parte que le perjudica; agravios que pueden relacionarse con una materia diversa a la que es objeto de los argumentos vertidos por el recurrente, en tanto que al interponerse el recurso de revisión surge para quien obtuvo sentencia favorable el derecho a expresar agravios encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia que orientaron al resolutivo favorable a sus intereses, y también a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Esto obedece a que quien obtiene un fallo que le favorece parcialmente tiene legitimación activa, en la medida del agravio, para interponer el recurso de revisión dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia y el hecho de no hacerlo solamente implica que hasta ese momento queda conforme con el resultado obtenido, porque tiene una sentencia que es parcialmente benéfica a sus intereses y no tiene la intención de continuar el litigio por todas las consecuencias inherentes del trámite de la segunda instancia; pero cuando otra de las partes en el juicio de amparo se inconforma con esa sentencia y hace valer el recurso de revisión, la pasividad mantenida hasta antes de la admisión del recurso, no supone que ha consentido el aspecto del fallo que le perjudica, porque la ley en la disposición que se analiza le otorga el derecho a adherirse a la revisión y expresar los agravios correspondientes, sin taxativa alguna, pues no limita el objeto de éstos a fortalecer las consideraciones de la sentencia que derivan en la parte resolutive favorable, sino que la redacción genérica de la ley al establecer “los agravios correspondientes”, comprende también la impugnación de las consideraciones que le perjudican y hayan producido un punto resolutive expreso, contrario a sus intereses. Una limitación sobre el particular no puede deducirse de lo establecido por el citado precepto legal en cuanto a que la revisión adhesiva sigue la suerte “procesal” de la principal, ya que también señala que el recurrente adhesivo expresará los agravios que correspondan, es decir, que exponga los agravios que a su derecho convengan. En este orden de ideas, queda justificado ocuparse de los agravios expuestos en la adhesión, porque aun cuando su contenido tiende a impugnar la parte de la sentencia que le perjudica al que la hace valer y no a mejorar las consideraciones de la parte resolutive que le favorece, ello es acorde con la finalidad de ese medio procesal de defensa.”

**AGRAVIOS**

**PRIMERO. PROCEDE DECLARAR INOPERANTES POR INSUFICIENTES E INEFICACES LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE EN RELACIÓN CON LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 6, 131, FRACCIÓN I, 134, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO TODA VEZ QUE ESTOS NO CONTROVIERTEN LOS RAZONAMIENTOS EXPRESADOS POR EL JUEZ EN LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL, REALIZANDO RAZONAMIENTOS ACCESORIOS.**

Conforme a lo anterior, de un análisis que se realice del escrito de agravios de la recurrente se puede advertir que no impugna los elementos establecidos por el A Quo al momento de resolver el juicio de amparo en estudio, sin que de ello se pueda advertir que controvierta de manera concreta y directa el análisis realizado por el A Quo.

En este sentido, los argumentos de la recurrente son inoperantes por ineficaces, puesto que no controvierten los razonamientos que en particular estableció el A Quo en su sentencia constitucional, es decir, en ningún

momento se desvirtúa la legalidad del fallo en revisión, pues solamente se realiza una síntesis de la resolución de referencia y de los conceptos de violación formulados.<sup>1</sup>

En este sentido debe tenerse presente que el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad.

No obstante lo anterior, de los agravios expuestos por la quejosa no se aprecia que éstos controviertan el sentido sustantivo del fallo, razón por la cual, ante su insuficiencia se solicita a ese H. Tribunal, confirmar la sentencia y NEGAR el amparo.

**SEGUNDO.- SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR EL QUEJOSO EN SU ESCRITO DE AGRAVIOS, YA QUE PLANTEA CUESTIONES QUE NO FUERON CONOCIDAS POR EL JUEZ FEDERAL.**

Lo anterior es así ya que la quejosa en su escrito de agravios señala lo siguiente:

“(...)

- ❖ La seguridad social no sólo abarca a los asegurados o trabajadores, sino que también está dirigida a sus familiares, por lo que a éstos tampoco se les puede reducir o restringir.
- ❖ Del estudio del procedimiento legislativo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se desprende que la finalidad de dicha reforma es otorgar protección integral a los trabajadores al servicio del estado y a sus familias, lo que implica la obligación de establecer un sistema integral que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentra expuesto, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida.
- ❖ Los derechos de seguridad social y en específico las prestaciones de pensiones de viudedad, concubinato, orfandad y ascendencia, no son prestaciones gratuitas, sino un derecho que se genera con los recursos que otorga durante toda la vida laboral del trabajador.
- ❖ La finalidad de la pensión por orfandad tiene como objeto primordial la de garantizar la subsistencia de sus dependientes económicos o núcleo familiar (beneficiario).
- ❖ Para garantizar la subsistencia de la familia (hijos) en caso de fallecimiento del trabajador, es necesario que se les otorgue los recursos económicos para que se encuentren en posibilidad de transitar por aquella etapa de la vida económicamente inactiva y con ello logren una profesión arte u oficio a la que se quieren dedicar.
- ❖ Así las cosas, la pensión por orfandad tiene por propósito el de garantizar el bienestar y protección integral del beneficiario, protegiéndole contra el

<sup>1</sup> Jurisprudencia 3ª./16/91 "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA", y la jurisprudencia 1a./J. 19/2009 "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN ARGUMENTOS ACCESORIOS EXPRESADOS EN LA SENTENCIA RECURRIDA, MÁXIME CUANDO ÉSTOS SEAN INCOMPATIBLES CON LAS RAZONES QUE SUSTENTAN EL SENTIDO TORAL DEL FALLO".

# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Procuraduría Fiscal de la Federación  
Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos  
Dirección General de Amparos Contra Leyes  
Dirección de Amparos Contra Leyes "A"

64  
109

eventual fallecimiento de alguno de sus progenitores, de forma que asegure al beneficiario menor de edad, o, en su caso el mayor de edad que continúe estudiando y no despliegue ningún trabajo remunerado, el atravesar por una etapa económicamente inactiva en la que se alleguen de los recursos necesarios que les darán una base para desarrollar los planes de vida para que llegado el momento de concluir sus estudios el o los beneficiarios puedan incorporarse a la vida laboral de manera eficaz, procurando en todo momento el mejoramiento de nivel de vida de éste.

- ❖ La prestación de una pensión por orfandad comparte teleológicamente el mismo objetivo que la institución de los alimentos, puesto que tienen como finalidad la de asegurar al beneficiario o acreedor el recurso económico necesario y proporcionarle los recursos necesarios para auxiliar a atravesar esa etapa económicamente inactiva, con la visión de que el beneficiario o acreedor se encuentren en aptitud de concluir aquella etapa educativa en la que se encuentran y posteriormente se pueda valer por el mismo, sin que pase desapercibido que tienden a cubrir las mismas necesidades.
- ❖ Que al existir dicha equiparación teleológica es prudente aseverar que al igual que la institución de los alimentos, la pensión por orfandad debe de comprender los gastos necesarios para proporcionarle una educación formalizada, es decir, la formación necesaria para desempeñar un oficio, arte o profesión, adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales, que en el caso en concreto se traduce en la ayuda para la obtención del título y posteriormente cédula profesional con efectos de patente que permita al suscrito ejercer mi profesión de manera plena.
- ❖ Resulta irrisorio pensar que cualquier estudio profesional con la consecuente titulación y tramitación de la cédula profesional se puede realizar antes de cumplidos veinticinco años de edad, puesto que resulta un hecho notorio que debido a las circunstancias actuales por las que atraviesa nuestro país es poco factible que una persona culmine sus estudios profesionales de manera integral, es decir adquiera el título o cédula para ejercer, antes de los veinticinco años.
- ❖ No proporcionar la pensión implicaría mermar las posibilidades finalizar los estudios profesionales con la natural consecuencia de dificultar la incorporación a una vida laboral efectiva, justa y acorde a la profesión que elegí como medio para subsistir y realizar mi plan de vida, puesto que restringiría una inversión económica y humana de años, encaminada a la consecución de la formación necesaria para desempeñar una profesión u oficio, que se vería fatalmente frustrada por una interrupción del apoyo económico en un momento en el que la misma todavía no puede dar sus frutos esperados, que dependen en gran medida de la conclusión de los estudios emprendidos y de la obtención del título y cédula profesional para poder ejercer la profesión, con lo que se dejaría de cumplir con el propósito de la norma secundaria y se vulneraría el derecho a una íntegra protección de la seguridad social.
- ❖ Escaso efecto práctico tendría, en las circunstancias actuales, atribuir legalmente el derecho a la pensión de orfandad los hijos del beneficiario para obtener lo necesario para estar en aptitud de desempeñar una profesión si el límite infranqueable de dichas prestaciones fuera la edad de veinticinco años. Pues la prevalencia rígida de la regla temporal de los artículos 6, 131 fracción I, 134 y el artículo primero y décimo transitorio fracción VI, último párrafo, suscribiría, en muchísimas ocasiones, toda virtualidad práctica al derecho a recibir lo necesario para tener una educación congruente culminado en lograr obtener una profesión que sea su medio de subsistencia para poder realizar su plan de vida, lo que a la luz de los intereses y derechos de seguridad, social, protección a la familiar, y mi dignidad, debe de justificar la prolongación de la pensión por orfandad a fin de procurar el mejoramiento del nivel de vida del beneficiario.
- ❖ De tal suerte que no proveer de los recursos necesarios para culminar la etapa estudiantil que me permita obtener un trabajo y por consiguiente un salario acorde a mi profesión captravendría la finalidad de la pensión por orfandad que es la de garantizar la subsistencia y procurar el mejoramiento del nivel de vida de sus dependientes económicos o núcleo familiar (beneficiario), con lo que se trasgredirían mis derechos de seguridad jurídica, seguridad, social, protección a la familiar y mi dignidad contenidos en los artículos 1º, 4º, 5º, 14º, 16º párrafo primero; 17º párrafo segundo, 26º A., 29º, 123º párrafos primero, segundo, así como su apartado A, fracción XXIX y su apartado B y 133º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 8º, 12º, 22º, 25º, 28º y 30º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1º, 2º, 11º, 17º, 24º, 26º, 28º y 30º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1º, 2º, 3º, 4º, 9º y 15º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" adoptado en la Ciudad de San Salvador; y 2º, 6º y 7º de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.

(...)





Y en las consideraciones que se han venido plasmando, podemos arribar a la conclusión de que los numerales que se tildan de inconstitucionales restringen el derecho de los hijos a recibir la pensión por orfandad derivada de la muerte del trabajador cuando éste cumpla la edad de veinticinco años de edad, no obstante de que la Norma Suprema prevé la protección integral que otorgue tranquilidad y bienestar para dichos trabajadores y sus familiares en caso de invalidez, vejez y muerte, además de que impone una obligación al legislador ordinario para que eleve cualquier norma de carácter general esté orientada a procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares y adoptar bases mínimas de seguridad social con igual propósito.

Lo anterior, encuentra sus justificación en que, como se mencionó con antelación, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional, no sólo se contienen las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino también deriva el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema integral que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentra expuesto, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida.

El derecho a recibir una pensión por orfandad como consecuencia de la muerte del trabajador, constituye uno de los propósitos fundamentales del principio de la previsión social que se encuentra bien definido y garantizado en la norma constitucional, así como en los tratados internacionales que invoqué.

Así, conforme a dichos preceptos, la muerte de un trabajador pensionado por incapacidad permanente total o un trabajador en activo (siempre que hayan satisfecho los requisitos previstos en el inciso g), por causas ajenas a las que generaron la incapacidad o al servicio, genera el derecho a recibir una pensión por orfandad, y su pago iniciará a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que haya originado tal pensión (artículo 130 de la ley de la materia).

Luego entonces, las porciones normativa impugnadas en el juicio biinstancial contravienen la garantía de seguridad social y el principio de la previsión social prevista en la nuestra Constitución Federal y en los Instrumentos Internacionales, debido a que restringen el derecho a percibir íntegramente la pensión por orfandad hasta cumplir con su objetivo que es el de proveer de los recursos necesarios para culminar la etapa estudiantil que me permita obtener un trabajo y naturalmente merman la posibilidad de que el suscrito llegue a percibir un salario acorde a mi profesión vulneraría la finalidad de la pensión por orfandad que es la de garantizar la subsistencia de sus dependientes económicos o núcleo familiar (beneficiario).

Pues como ya se mencionó, no hacerlo implicaría mermar las posibilidades finalizar los estudios profesionales con la natural consecuencia de dificultar la incorporación a una vida laboral efectiva que no cumpliría con la obligación de establecer un sistema integral que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentra expuesto, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida, puesto que restringiría una inversión económica y humana de años, encaminada a la consecución de la formación necesaria para desempeñar una profesión u oficio, que se vería fatalmente frustrada por una interrupción del apoyo económico en un momento en el que la misma todavía no puede dar sus frutos esperados, que dependen en gran medida de la conclusión de los estudios emprendidos y de la obtención del título y cédula profesional para poder ejercer la profesión.

Así, el disfrute del derecho de la pensión por orfandad coadyuva a hacer efectiva la garantía de la previsión social, orientada a otorgar tranquilidad y bienestar de los familiares del trabajador o pensionado muerto, mejorando el nivel de vida de los hijos.

No obviando manifestar, que como se hizo referencia con anterioridad, los beneficios de las pensiones por orfandad no son una concesión gratuita o generosa, sino que constituye un seguro que se activa con la muerte del trabajador o pensionado, y deriva directamente de las aportaciones que éste haya hecho por determinado número de años de trabajo productivo y que reitero tiene como finalidad la de garantizar la subsistencia de los beneficiarios del trabajador después de acaecida su muerte otorgándoles tranquilidad y bienestar personal, procurando en todo momento el mejoramiento del nivel y calidad de vida.

De tal suerte que no existe una justificación constitucional por la cual se restrinja y limite de manera infranqueable la oportunidad de recibir la pensión por orfandad mientras los hijos se encuentren estudiando estudios acordes a su edad y a sus circunstancias personales, sin obviar, que ello no pone en riesgo de ninguna manera la viabilidad financiera de las pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

(...)"



Sin embargo de la lectura de su demanda de no se desprende que dicha circunstancia haya sido reclamada en su demanda de amparo, ni muchos menos existe pronunciamiento alguno en sus conceptos de violación, por lo que resulta evidente que lo que pretende el recurrente en su escrito de agravios es variar la Litis del juicio que nos ocupa.

En efecto, los agravios que realizó la quejosa en su escrito incluye nuevos argumentos, por lo que deben declararse inoperantes, ya que la finalidad del recurso de revisión es realizar agravios referentes a la sentencia que demuestren su ilegalidad.

Apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 150/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 52, de rubro siguiente: **"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN."**

De igual forma sirve de apoyo, la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 188/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 424, de rubro siguiente: **"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN."**

De las jurisprudencias anteriormente citadas se desprende que resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de amparo, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, y que por tanto la autoridad revisora está impendida a estudiar nuevos planteamientos ya que esto variaría la litis y alteraría el acto reclamado.

Por lo que al incluirse en el escrito de agravios cuestiones novedosas que no fueron parte de la litis, lo procedente es declarar inatendibles los agravios sustentados por la recurrente.

En tales consideraciones, lo procedente es que se declaren inoperantes los agravios de la quejosa, pues como ha quedado explicado, lo que pretende el recurrente es variar la litis, realizando manifestaciones novedosas que no son propias del recurso de revisión, en virtud de que no atacan la legalidad de sentencia y que tampoco se hicieron valer en el demanda de amparo.

Por lo antes expuesto, ante lo inoperante de los agravios planteado por la quejosa en su recurso de revisión, lo procedente es que se CONFIRME la sentencia recurrida, la cual NEGÓ en el presente juicio de amparo.

JN  
**TERCERO.-PROCEDE CONFIRMAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 61, FRACCIÓN XII, TODA VEZ QUE EL QUEJOSO NO DEMUESTRA TENER INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN VI, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.**

Al respecto el A quo, señaló lo siguiente:

"(...)

Al respecto, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos invoca la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al estimar que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo en contra de la constitucionalidad de los artículos primero y décimo transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil siete, toda vez que los actos reclamados no lesionan los intereses jurídicos de la parte quejosa.

(...)

De la lectura de los artículos transitorios, se desprende que las modalidades previstas en dichos dispositivos transitorios se refieren exclusivamente al sistema de pensiones previsto en el Capítulo V del Título Segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1983, ya que tales modalidades sólo se aplican a las pensiones de jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio, invalidez, muerte y cesantía en edad avanzada de las que no goza la parte quejosa; de ahí que se estime que los artículos transitorios no le causan perjuicio alguno.

En esas circunstancias se estima actualizada la citada causa de improcedencia; razón por la cual deberá sobreseerse respecto de dichos actos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo.

(...)"

En efecto, la quejosa en su escrito inicial de demanda, reclama el artículo Décimo Transitorio, fracción VI, último párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, siendo que el mismo fue creado para poder lograr los objetivos que establece dicho ordenamiento, por lo que no puede la impetrante de garantías afirmar le cause perjuicio en su esfera jurídica sin que ofrezca prueba idónea a través de la cual se pueda afirmar que el quejoso se encuentra dentro de los diversos supuestos que abarcan dichos numerales.

Al respecto resulta necesario transcribir los artículos impugnados:

"(...)

DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:

(...)

VI. Los Trabajadores a que se refiere este artículo, en caso de invalidez, estarán sujetos a un periodo mínimo de cotización de quince años para tener derecho a Pensión, misma que se otorgará por un porcentaje del promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior, conforme a lo siguiente:

15 años de servicio.....	50 %
16 años de servicio.....	52.5 %
17 años de servicio.....	55 %
18 años de servicio.....	57.5 %
19 años de servicio.....	60 %
20 años de servicio.....	62.5 %
21 años de servicio.....	65 %
22 años de servicio.....	67.5 %
23 años de servicio.....	70 %
24 años de servicio.....	72.5 %
25 años de servicio.....	75 %
26 años de servicio.....	80 %
27 años de servicio.....	85 %
28 años de servicio.....	90 %
29 años de servicio.....	95 %

Los Familiares Derechohabientes del Trabajador fallecido, en el orden que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen derecho a una Pensión equivalente

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRIMER ABOGADO GENERAL DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE JUSTICIA  
SE  
SECRETARÍA

al cien por ciento de la que hubiese correspondido al Trabajador, aplicándose el periodo mínimo de quince años de cotización para tener derecho a la Pensión.

(...)"

En efecto, la quejosa en su escrito de demanda, señala como precepto impugnado el artículo Décimo Transitorio, fracción VI, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin embargo no aporta prueba idónea mediante la cual se pueda corroborar que se le aplicaron dichos numerales.

Esto es, el quejoso no aporta prueba alguna en la que demuestre la aplicación del numeral impugnado, en tal virtud, no tiene interés jurídico para combatir el artículo Décimo Transitorio, fracción VI, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, siendo que en efecto el quejoso en su mismo escrito de demanda de amparo manifiesta que acudió a la subdelegación de Prestaciones U.A.P.E., número 5, de la Delegación Zona Sur, y que de "manera verbal" supuestamente fue informado de que no se le seguiría proporcionando la pensión por orfandad toda vez que había cumplido 25 años, sin que compruebe con prueba fehaciente, lo antes señalado, situación que imposibilita a ese Juzgador entrar al análisis de constitucionalidad de lo planteado por el quejoso.

Asimismo, cabe mencionar que la demostración de la afectación jurídica por un precepto requiere que el impetrante acredite estar colocado bajo los supuestos que dicha norma contempla. Esto es así, toda vez que en la especie, el quejoso no demuestra con ningún medio de prueba, que realmente cuenta se le haya suspendido la pensión por orfandad.

Lo anterior es así, toda vez que el quejoso no tiene interés para señalar como acto impugnado el artículo Décimo Transitorio, fracción VI, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues al no acreditar con prueba idónea tener la suspensión de pensión por orfandad por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Apoya lo anterior por analogía, la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. XXXIX/93, Octava Época, vista a fojas 23 del el Tomo 67, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1993, cuyo rubro es el siguiente:

**"AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACION A LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN SIDO APLICADOS, ASI COMO AQUELLOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECIFICO DENTRO DEL QUE SE UBICA."**

Ahora bien, atendiendo a que cada una de las normas es susceptible de afectar la esfera jurídica de los destinatarios de éstas, hay disposiciones que, por no haberseles aplicado, no pueden depararles perjuicio alguno.

En apoyo a este argumento, es aplicable, por analogía, la tesis P. XXXIX/93, sustentada por el Tribunal en Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Octava Época, consultable en Página 23, Tomo 67, Julio de 1993, del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente:

**"AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACION A LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN SIDO APLICADOS, ASI COMO AQUELLOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECIFICO DENTRO DEL QUE SE UBICA."**



En esta virtud, resulta evidente que en el presente juicio, el contenido del artículo Décimo Transitorio, fracción VI, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no agravia la esfera jurídica del enjuiciante, pues para que esto suceda, resulta indispensable que la quejosa acredite, que dicho numeral le irroga un agravio personal y directo, en virtud de que se trata de un ordenamiento legal de carácter heteroaplicativo, respecto del cual no acredita con prueba idónea que se encuentra en alguno de los supuestos contemplados por dicho artículo para demostrar que hubo un acto concreto de aplicación que afecte su esfera jurídica y que le dé el derecho de accionar el juicio de amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, del Informe de Labores presentado por su Presidente, correspondiente al año de 1988, Segunda Parte, de rubro siguiente:

**"LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO."**

Asimismo, tiene aplicación la tesis jurisprudencial número 95, visible en la página 179, de la Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, correspondiente al Tribunal Pleno, cuyo rubro es el siguiente:

**"INTERÉS JURÍDICO. AMPARO CONTRA LEYES."**

De lo anterior se concluye que debe confirmar el sobreseimiento de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XII, por falta de interés jurídico.

**CUARTO.- PROCEDE CONFIRMAR LO SEÑALADO POR EL A QUO EN RELACIÓN A QUE LOS ARTÍCULOS 6, 131, FRACCIÓN I, 134, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, NO VIOLAN EN SU PERJUICIO EL ARTÍCULO 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

Al respecto el A quo, indicó lo siguiente:

("...")

Establecido lo anterior, debe decidirse que los preceptos reclamados no resultan violatorios del artículo 123 de la Constitución Federal, ni de los diversos numerales 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9° y 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; "Protocolo de San Salvador"; 2°, 6° y 7° de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias; toda vez que las normas reclamadas establecen el derecho a favor de los beneficiarios de gozar de las prestaciones de seguridad social que se generen, en caso de muerte del trabajador, pues disponen que los hijos del servidor público pueden gozar de una pensión por orfandad hasta los veinticinco años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, lo cual les permite madurar en sus capacidades física, intelectual y moral.

De manera que los artículos reclamados permiten que los beneficiarios de los trabajadores fallecidos obtengan los recursos económicos de una pensión por orfandad, incluso después de la mayoría de edad, siempre y cuando comprueben que están realizando estudios de nivel medio superior o superior; de ahí que se estime que los artículos 6°, 131, fracción I, 134, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respetan el derecho de seguridad social consagrado en el precepto constitucional y normas internacionales de las que se ha dado noticia.

En ese sentido, es claro que los instrumentos de carácter internacional citados no maximizan el derecho de seguridad social que se estima vulnerado, al grado de considerar que la pensión de orfandad debe pagarse a los beneficiarios hasta que concluyan los trámites de titulación y cuenten con la cédula profesional con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de licenciatura.

("...")

67  
112

Al respecto, resulta conveniente transcribir el contenido del Artículo 123 apartado B), fracción XI, inciso a), Constitucional:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:  
(...)

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:  
(...)

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.  
(...)"

IBUNAL  
N MATERIA  
ATIVA DEL  
RCUITO  
D.F.

Como se observa de su lectura, el artículo 123 Apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé los derechos de seguridad social a favor de los trabajadores al Servicio del Estado, lo que constituye una de las especies de las garantías sociales que consagra nuestra la Carta Magna.

A) No obstante la consideración anterior, es de señalarse que se ha reconocido por diversos criterios jurisprudenciales, que el artículo 123 Apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **ESTABLECE ÚNICAMENTE LOS DERECHOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, y que sus PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y MODALIDADES, SE ESTABLECEN EN LA LEY SECUNDARIA**, que en el caso, resulta ser la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, norma administrativa expedida por el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad reglamentaria que confiere a su favor el artículo 89 fracción I, de la Constitución Federal.

Por lo que, si la ley, a través del cual, se precisan los términos y condiciones conforme a los cuales deben concederse los beneficios que establece la Constitución, entre los cuales se encuentra la pensión por orfandad; **RESULTA ENTONCES QUE, PARA BENEFICIARSE, DE SU OTORGAMIENTO**, el quejoso debe cumplir con los requisitos que se establecen en los artículos 6, 131, fracción I, 134, y el artículo Décimo Transitorio, fracción VI, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los artículos impugnados, indican:

"Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

**XII. Familiares derechohabientes a:**

- a) El cónyuge, o a falta de éste, el varón o la mujer con quien, la Trabajadora o la Pensionada con relación al primero, o el Trabajador o el Pensionado, con relación a la segunda, ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el Trabajador o el Pensionado, tiene varias concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley;
- b) Los hijos del Trabajador menores de dieciocho años;

c) Los hijos del Trabajador o Pensionado mayores de dieciocho años, cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen, lo que se comprobará mediante certificado médico, expedido por el Instituto y por medios legales procedentes; o hasta la edad de veinticinco años, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio superior o superior, de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo, y

d) Los ascendientes que dependan económicamente del Trabajador o Pensionado.

Los familiares que se mencionan en esta fracción tendrán el derecho que esta Ley establece si reúnen los requisitos siguientes:

1) Que el Trabajador o el Pensionado tenga derecho a los seguros, prestaciones y servicios señalados en esta Ley, y

2) Que dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley, o a otros similares en materia de servicios de salud, otorgados por cualquier otro instituto de seguridad social;

(...)

Artículo 131. El orden para gozar de las Pensiones a que se refiere este artículo por los Familiares Derechohabientes será el siguiente:

I. El cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de dieciocho años o que no sean menores de dieciocho años pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien hasta veinticinco años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo;

(...)

Artículo 134. Si el Pensionado por orfandad llegare a los dieciocho años y no pudiese mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, el pago de la Pensión por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación, previa comprobación anual mediante dictamen médico emitido por el propio Instituto para efecto de determinar su estado de invalidez, haciéndose acreedor, en caso contrario, a la suspensión de la Pensión; asimismo continuarán disfrutando de la Pensión los hijos solteros hasta los veinticinco años de edad, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo.

(...)"

De los artículos antes transcritos se desprende lo siguiente:

- Los Familiares Derechohabientes del Trabajador fallecido, tienen derecho a una Pensión equivalente al 100% de la que hubiese correspondido al Trabajador, aplicándose el período mínimo de quince años de cotización para tener derecho a la Pensión.
- **Que los Familiares derechohabientes son:**

68  
113

- a) El cónyuge.
- b) El varón o la mujer con quien, la Trabajadora o la Pensionada con relación al primero, o el Trabajador o el Pensionado, con relación a la segunda, ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores.
- c) El varón o la mujer con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio.
- d) Los hijos del Trabajador menores de dieciocho años
- e) Los hijos del Trabajador o Pensionado mayores de dieciocho años, cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen;
- f) Los hijos del Trabajador o Pensionado hasta la edad de 25 años, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio superior o superior, y que no tengan un trabajo

• El orden para gozar de las Pensiones para los Familiares Derechohabientes es el siguiente:

- ✓ El cónyuge superviviente sólo si no hay hijos
- ✓ En concurrencia con éstos si los hay y son menores de 18 años o que no sean menores de 18 años pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien hasta 25 años previa comprobación de que están realizando estudios y que no tengan trabajo.

IBUNAL  
N MATERIA  
ATIVA DEL  
RCUITO.  
D, D.F.

De una interpretación de las normas impugnadas, es evidente que se respetan los derechos del gobernado regulando las condiciones en que se determina la obtención de la pensión por orfandad, lo que como ya se demostró no violenta el principio de seguridad social, pues mientras la Carta Magna establece los derechos mínimos de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, la ley secundaria se encarga de precisar los términos y condiciones respecto de los cuales debe concederse el beneficio que establece la Constitución.

Asimismo, es preciso aclarar que de igual manera carece de sustento la afirmación de la impetrante de garantías en el sentido de que, del proceso legislativo que originó el Apartado B, del mencionado artículo 123, Constitucional, se advierte que el poder reformador de la Carta Magna, dispuso que las garantías sociales en ningún momento puedan restringirse.

Lo anterior obedece atento a que de la lectura de sus propias consideraciones, se observa que éstas se sustentan en lo siguiente:

"(...)

En la iniciativa de reforma constitucional, a la cual se le dio lectura en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el siete de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, en la parte que interesa para resolver este asunto, es del tenor siguiente:

*"La adición que se propone al Texto Constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como los de sus familiares; jornada máxima, tanto diurna como nocturna, descansos semanales, vacaciones, salarios, permanencia en el trabajo, escalafón para los ascensos, derecho para asociarse, uso del derecho de huelga, protección en caso de accidentes y enfermedades, así profesionales como no profesionales, jubilación, protección en caso de invalidez, vejez y muerte, centros vacaciones y de recuperación, habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, así como las medidas protectoras indispensables para las mujeres durante el periodo de gestación, en el alumbramiento y durante la lactancia"*



En el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo de esa Cámara, al cual se le dio lectura el diez de diciembre siguiente, en lo que interesa a la letra dice:

*"2. Las comisiones dictaminadoras consideran absolutamente justificadas las adiciones al artículo 123, materia de la iniciativa. Siguiendo la tradición establecida por el Constituyente de 1917 y a fin de enriquecer las garantías sociales que nuestra Constitución consagra, se elevan a la categoría de norma constitucional disposiciones que tienden a garantizar el respeto de los derechos inherentes a los servidores del Estado, limitando el poder público en sus relaciones con ellos a procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares y adoptar bases mínimas de seguridad social con el mismo propósito"*

En la discusión del dictamen de referencia intervino el senador Rodolfo Brena Torres quien, en lo interesante, manifestó lo siguiente:

*"...Actualmente, en mil novecientos cincuenta y nueve, la revolución establece constitucionalmente garantías mínimas a los servidores del Estado; garantías que podrán ampliarse, pero nunca restringirse por posteriores leyes secundarias que emanen del Congreso de la Unión..."*

En el dictamen elaborado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al que se le dio lectura en la sesión ordinaria celebrada el veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, entre otras cosas, se razono lo siguiente:

*"Al efecto, el señor presidente de la República indica que ha sido de su preocupación mantener y consolidar los ideales revolucionarios, cuyo legado ha recibido con plena conciencia y responsabilidad por todo lo que representa para el progreso de México, dentro de la justicia social, que los trabajadores al servicio del Estado no habían disfrutado con plenitud de todas las garantías sociales consagradas en la Constitución General de la República para los trabajadores del campo y de la industria privada; que si bien es cierto que es de distinta naturaleza la relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus patrones, respecto de los servicios públicos con el Estado, también lo es que el trabajo no constituye una simple mercancía, sino que forma parte de"*

*Esencial de la dignidad del hombre y que la adición que propone el Texto Constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y consagra las bases mínimas de protección social que aseguran en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como los de su familia..."*

*Es, pues, de gran trascendencia la iniciativa que se nos presenta a estudio y consideramos que de ser aprobada por esta asamblea. Pero estimamos que es indispensable dejar precisado, como lo hace el señor presidente en su exposición de motivos, que las adiciones y reformas que se proponen al artículo 123 se refieren a los trabajadores al servicio del Estado, dentro de cuya denominación de trabajadores se comprenden a todos los que tienen una designación legal como tales, cualesquiera que sea la forma de ella, por lo que motiva que se hagan algunas modificaciones por estas comisiones unidas, al texto de la iniciativa presidencial, como a las llevadas a cabo por el H. Senado de la República. En la fracción XI, que trata de la seguridad social se usa en sus incisos b, d, e y f, el concepto 'empleado público', que se presta a diversas interpretaciones, y congruentes con la exposición de motivos de la iniciativa presidencial proponemos que se sustituya ese concepto por el de "trabajadores"; en esas condiciones, queda claramente establecido que los beneficios a favor de los servidores públicos son para todos aquellos que se encuentren al servicio del Estado, operando dicha sustitución en las fracciones que usan el término 'empleados'. Consecuentemente con lo expresado en el párrafo anterior, no estimamos adecuado el empleo de la palabra 'empleados' que agregó al enunciado del apartado B, el Senado de la República, el cual*

67  
 14

*seguramente lo incluyó por haberse usado ese vocablo en los incisos citados de la fracción XI de ese apartado de la iniciativa presidencial. Respetando, por consiguiente, el resto de la redacción propuesta por el Senado, deben quedar, en opinión de esa comisión redactados los enunciados que se mencionan de la siguiente manera..."*  
 (...)"

De lo anterior se observa, que si bien, la adición del apartado B, al artículo 123, Constitucional tenía como objetivo enriquecer las garantías sociales que la Carta Magna consagra, elevando a rango constitucional disposiciones que tienden a garantizar el respeto de los derechos inherentes a los servidores del Estado, limitando el poder público en sus relaciones con ellos, con la finalidad de procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares; también lo es que, no debe perderse de vista, que, en tal exposición se reconoce que las garantías establecidas son MÍNIMAS.

No es óbice en el caso, que con base en la mencionada exposición de motivos, la quejosa deduzca que las garantías mínimas establecidas en la Constitución, no pueden restringirse para la obtención de la pensión por orfandad, esto es, el cumplir 25 años; atento a que, el artículo 123 Apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los derechos mínimos de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, como son entre otros, la jubilación, pensiones, sin señalar los términos o condiciones conforme a los cuales deberán otorgarse las prestaciones correspondientes, de lo que se sigue que la facultad conferida al legislador para regular tales aspectos no encuentra en el citado precepto constitucional limitación o condición alguna, es decir, la Constitución NO SEÑALA LOS TÉRMINOS O CONDICIONES CONFORME A LOS CUALES DEBERÁN OTORGARSE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES; PUES ÉSTOS ÚLTIMOS CORRESPONDEN AL LEGISLADOR.

En virtud de lo anteriormente expuesto, es dable concluir que los artículos 6, 131, fracción I, 134, y el artículo Décimo Transitorio, fracción VI, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al establecer requisitos para la obtención de la pensión por orfandad, no viola garantía constitucional alguna, por lo que procede se niegue el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la quejosa.

**AHORA BIEN EN EL SUPUESTO SIN CONCEDER QUE ESE H. TRIBUNAL CONSIDERE DESESTIMAR LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SEÑALADA EN EL PRESENTE JUICIO AD CAUTELAM ESTA REPRESENTACION MANIESTA LO SIGUIENTE:**

**QUINTO.- LOS ARTÍCULOS 6, 131, FRACCIÓN I, 134, Y EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN VI, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, RESPETA EL DERECHO DE SEGURIDAD JURÍDICA TODA VEZ QUE NO PRIVA Y NI LIMITA LA POSIBILIDAD DEL PENSIONADO POR ORFANDAD DE CONTINUAR CON SU EDUCACIÓN.**

La garantía de seguridad jurídica consiste en que la ley debe de contener todos los elementos para que el gobernado pueda defender sus derechos, así como "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad.

El artículo 16 constitucional, el cual prevé la garantía de seguridad jurídica, indica:

(...)

*"Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..."*

Así, la seguridad jurídica radica en que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a. /J. 144/2006, de la Novena Época; Segunda Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Octubre de 2006; Pág. 351., que establece lo siguiente:

**GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.** La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenore un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.

\*El énfasis es nuestro.

De acuerdo a la jurisprudencia transcrita, la garantía de seguridad jurídica prohíbe a las autoridades llevar a cabo actos de afectación en contra de particulares; y si han de cometerlos tales actos, deberán cumplir los requisitos previamente establecidos, a fin de no vulnerar la esfera jurídica de los individuos a que se dirijan dichos actos.

En tanto que para los órganos del Estado, se deben de apegar a las prescripciones que la Constitución y las leyes les imponen para que sus actos no sean arbitrarios, así los gobernados pueden confiar en que no serán molestados, siempre que no se actualice el supuesto de alguna norma que haga procedente el acto de molestia o privación.

Al respecto, resulta necesario transcribir el artículo 134, de la LISSSTE, que indica lo siguiente:

"(...)

Artículo 134. Si el Pensionado por orfandad llegare a los dieciocho años y no pudiere mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, el pago de la Pensión por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación, previa comprobación anual mediante dictamen médico emitido por el propio Instituto para efecto de determinar su estado de invalidez, haciéndose acreedor, en caso contrario, a la suspensión de la Pensión; asimismo continuarán disfrutando de la Pensión los hijos solteros hasta los veinticinco años de edad, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo.  
(...)"

De la transcripción anterior, podemos desprender que para los supuestos permanencia de la pensión por orfandad, son los siguientes:

1. Los hijos que llegaran a los 18 años, y no pudieran mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera o discapacidad por deficiencia físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, se prorrogara la pensión hasta el tiempo en que subsista la inhabilitación, previa comprobación anual médica.



- Los hijos solteros hasta los 25 años, previa comprobación que se encuentren realizando estudios de nivel medio o superior y que no tengan trabajo.

En razón de lo anterior, podemos señalar que a el quejoso se le otorgó la pensión por orfandad toda vez que se encontraba realizando estudios a nivel superior, y era menor a los 25 años, y que actualmente no se encuentra en dichos supuestos para continuar gozando de la pensión, tal y como se advierte del acta de nacimiento y del hecho 6 en el que admite haber concluido sus estudios profesionales.

Por lo que, contrario a lo señalado por el quejoso, los artículos 6, 131, fracción I, 134, y el artículo Décimo Transitorio, fracción VI, último párrafo, de la LISSSTE, indican a qué atenerse sobre las bases para el otorgamiento de la pensión por orfandad, por lo que de ninguna forma se viola el principio de seguridad jurídica.

Lo anterior, es evidente toda vez que de la disposición normativa en su artículo 134, se establecen las bases para la continuidad del otorgamiento de las pensiones por orfandad, lo cual de ninguna manera se vulnera la garantía de seguridad jurídica, toda vez que el gobernado sabe en todo momento la hipótesis en la que se encuentra respecto de la norma.

Por lo antes expuesto, al demostrar lo infundado de los argumentos de la parte quejosa lo procedente es NEGAR el amparo a la parte quejosa.

RCUITO.

, D.F.

**SEXTO. - LOS ARTÍCULOS 6, 131, FRACCIÓN I, 134, Y EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN VI, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA.**

En ese sentido, el derecho a la dignidad humana garantiza el respeto y la protección de la dignidad, lo que le da facultad a cada individuo de poder desarrollarse y actuar en la sociedad sin temor a que se vea violentada su dignidad, la cuál debe ser reconocida de manera igualitaria a todos los individuos como sujetos partícipes de la misma y que cuentan con derechos y obligaciones al interior del Estado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. LXV/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Diciembre de 2009, del rubro y texto siguientes:

**"DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES.** El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del

reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad."

En esa tesitura, el reconocimiento de los derechos humanos trae consigo que se analicen a partir de la protección que conciben como derechos fundamentales y con base en las garantías individuales consagradas en la propia Constitución, por ello, la dignidad humana debe ser respetada, al constituirse como la base y condición de diversos derechos humanos, incluido el propio derecho a la dignidad personal, mismos derechos que permiten el desarrollo integral del ser humano y de las garantías individuales, tales como no discriminación, audiencia, legalidad, seguridad jurídica, entre otras; sin embargo, la parte quejosa soslaya el hecho de que, si bien constitucionalmente se reconoce el derecho que tiene el trabajador y sus familiares a la seguridad social, como es el derecho que se tiene a la pensión por orfandad, que el hecho de que se establezcan ciertas modalidades en las leyes secundarias para su otorgamiento, en nada afectan la constitucionalidad del dispositivo legal que se reclama, pues no se debe perder de vista que el otorgamiento a la pensión por orfandad es un derecho que se otorga a los hijos del trabajador, y que su otorgamiento está condicionado a determinados requisitos y los cuales deben satisfacerse para ser procedente.

En este sentido, es importante señalar que las pensiones a que se refieren los artículos impugnados pretenden brindar una mayor cobertura económica a sus beneficiarios garantizando una vida digna, estableciendo requisitos para la obtención de la pensión por orfandad, lo que de ninguna manera puede ser considerado como violatorio de los derechos subjetivos del quejoso.

En ese orden de ideas, no puede estimarse que los artículos 6, 131, fracción I, 134, y el artículo Décimo Transitorio, fracción VI, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vulneren el principio de Dignidad Humana.

Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada I.7º.A.811 A (9ª.) emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguiente:

**PENSIÓN POR ORFANDAD. REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO RESPECTO DE HIJOS DEL ASEGURADO MAYORES DE 18 AÑOS QUE SE ENCUENTREN INCAPACITADOS O IMPOSIBILITADOS PARCIAL O TOTALMENTE PARA TRABAJAR (LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA).** De los artículos 73, 74 y 75, fracción I, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se advierte que la muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad y siempre que hubiere cotizado al citado instituto por más de 15 años, o bien que tenga lugar cuando haya cumplido 60 o más años de edad y un mínimo de 10 de cotización, así como la de un pensionado por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada o invalidez, dará origen, entre otras pensiones, a la de orfandad, cuyo pago inicia a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que haya originado la pensión, debiendo observarse un orden para gozar de ésta, es decir, en primer término la esposa superviviente sola si no hay hijos, o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de 18 años o que no lo sean pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar. Por otro lado, el artículo 48 del mencionado ordenamiento dispone que el derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentran en los supuestos consignados en la mencionada ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. En consecuencia, a efecto de que el organismo asegurador otorgue una pensión por orfandad derivada de la incapacidad o imposibilidad parcial o total para trabajar del hijo del asegurado mayor de 18 años, el solicitante debe acreditar lo siguiente: 1) La muerte del trabajador; 2) La filiación con el progenitor; 3) El tiempo de cotización del trabajador que generó la pensión y la edad en caso de que no se tenga el tiempo de cotización requerido; 4) La incapacidad o imposibilidad parcial o total para trabajar a pesar de la mayoría de

edad; y 5) Que dicha incapacidad o imposibilidad para trabajar se padezca desde que falleció el trabajador, puesto que el fallecimiento de éste es la causa que origina la pensión y, por ende, la que genera el derecho a su pago.

En el mismo sentido, resulta aplicable el siguiente criterio:

Época: Décima Época  
 Registro: 2002349  
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
 Tipo de Tesis: Aislada  
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
 Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2  
 Materia(s): Laboral  
 Tesis: IL3o.A.35 A (10a.)  
 Página: 1452



TRIBUNAL  
 EN MATERIA  
 RATIVA DE  
 CIRCUITO  
 CO, D.F.

**PENSIÓN POR ORFANDAD. SIGNIFICADO DE LA PALABRA "HASTA", EN RELACIÓN CON LOS VEINTICINCO AÑOS DE EDAD PARA SU DISFRUTE, EMPLEADA EN LOS ARTÍCULOS 75, FRACCIÓN I Y 78 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA, ASÍ COMO 131, FRACCIÓN I Y 134 DE LA VIGENTE.** De la interpretación de los artículos 75, fracción I y 78, del citado ordenamiento, abrogado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, así como 131, fracción I; y 134, del vigente, que prevén que los pensionados por orfandad disfrutarán de la pensión "hasta" los veinticinco años de edad, previa comprobación de que realizan estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan trabajo remunerado, se colige que el significado de la palabra "hasta", empleada en dichos preceptos, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, denota el término de tiempo, lugares, acciones o cantidades, por lo que debe considerarse que fija un término exacto, el cual no puede excederse, esto es, una vez cumplidos veinticinco años, no puede irse más allá, pues cualquier transcurso del tiempo origina una edad mayor, con independencia de que, en años, tal edad se complete en un periodo de doce meses. De lo anterior resulta lo ilegal de la interpretación en el sentido de que la pensión por orfandad debe otorgarse hasta un día antes de que el beneficiario cumpla veintiséis años.

Por lo anterior, contrario a lo que sostiene el quejoso, los artículos, 6, 131, fracción I, 134, y el artículo Décimo Transitorio, fracción VI, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no violentan la dignidad humana.

**SEPTIMO.- LOS ARTÍCULOS 6, 131, FRACCIÓN I, 134, Y EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN VI, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, NO SON VIOLATORIOS DE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO.**

Al respecto el artículo 5 de nuestra Carta Magna establece la garantía de libertad de trabajo a que todos los gobernados tienen derecho, estableciendo textualmente lo siguiente:

*"Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernamental, dictada en los*



*términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.*

Ahora bien, es importante señalar que la libertad de trabajo no es absoluta de conformidad con los principios fundamentales que rigen al artículo 5 de nuestra Carta Magna, pues su ejercicio se condiciona a la satisfacción de los siguientes supuestos:

1. Que la libertad contenida en el precepto constitucional es permisiva; esto es, que la actividad esté permitida por la ley.
2. Que el ejercicio de esta libertad permisiva sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se afecten los derechos de tercero.
3. Que dicha libertad también podrá vedarse por resolución gubernativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

De ahí que se considere que para que el estado garantice la libertad de trabajo, debe de cumplirse los requisitos antes mencionados, ya que de lo contrario se afectaría el interés social, en aras de una buena convivencia y el bienestar en general.

Como se puede inferir de la disposición analizada el ejercicio de la libertad de trabajo no puede ser irrestricto y sujeto al libre albedrío de quienes lo practiquen, ya que el propio texto de este imperativo legal establece una clara reserva de ley, al disponer que la libertad de comercio puede ser vedada por las razones que ahí especifica.

El término vedar no entraña una prohibición absoluta, como parece indicarlo una simple lectura del artículo 5º constitucional que se comenta, sino que el estudio sistemático de sus significados y sinónimos permite observar que la palabra en examen tiene una mayor amplitud semántica que la sola significación de prohibir, pues se refiere primordialmente a la idea de suspender, de entorpecer y de estorbar el ejercicio de la libertad de comercio, lo que equivale a una mera limitación de esa garantía.

En otras palabras, es una prohibición parcial, ya que, desde el punto de vista semántico, el verbo "vedar" no tiene únicamente la connotación del vocablo "prohibir", que significa apartar, mantener lejos, tal cual lo precisa el Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico de J. Corominas, y que, obviamente, sí entraña una idea de separación absoluta y permanente.

La razón de la divergencia en comento resulta evidente, porque los artículos en los que el Constituyente utilizó explícitamente el verbo prohibir amparan las garantías de libertad personal, de integridad física y de seguridad jurídica, las cuales indiscutiblemente ocupan un lugar predominante dentro de nuestro sistema jurídico y, por otra parte, si bien la libertad de trabajo también es un derecho fundamental de los individuos, empero, sus fines tienden a proteger aspectos laborales y económicos, que obviamente no poseen el mismo rango de trascendencia que aquellas garantías que resguardan la vida, la libertad personal, la integridad física y la seguridad jurídica de las personas.

De esta manera, nuestra Máxima Ley, entiende la libertad de trabajo en función de la sociedad pues autoriza que se limite en beneficio de la colectividad, y así, cuando ésta se pueda perjudicar con su uso indebido, la misma debe restringirse hasta que cese el perjuicio.

Sustenta lo anterior el criterio jurisprudencial P./J. 28/99 de la Novena Época, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación en abril de 1999, Tomo IX, pagina 260 cuyo texto es el siguiente:



LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La garantía individual de libertad de trabajo que consagra el artículo 5o., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que, con base en los principios fundamentales que deben atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacción de los siguientes presupuestos: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en general. En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra vigencia en la medida que se refiera a una actividad lícita, esto es, que esté permitida por la ley. El segundo presupuesto normativo implica que la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación de un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro. Finalmente, el tercer presupuesto implica que la garantía será exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, en tanto que existe un valor que se pondera y asegura, que se traduce en la convivencia y bienestar social, lo que significa que se protege el interés de la sociedad por encima del particular y, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede afectarse aquél en una proporción mayor del beneficio que obtendría el gobernado.



TRIBUNAL  
IN MATERIA  
ATIVA DEL  
RCUITO.  
, D.F.

En estas condiciones, el derecho humano a la libertad de trabajo no es absoluto, en tanto que pondera a su vez la licitud de la actividad de que se trate así como los derechos de terceros y de la sociedad en general, consignando de esta manera limitaciones a tal derecho basados en principios fundamentales a los que debe atenderse para su exigibilidad y tutela.

Por otra parte, del análisis cuidadoso del artículo 5 de la Constitución, se desprende que el Poder Legislativo, en su función de emitir leyes, puede restringir la libertad de trabajo de una manera general, impersonal y abstracta, determinando que una actividad es ilícita, pero de ninguna manera puede establecer restricciones a ese derecho en relación a gobernados en particular, aunque éstos se mencionen de modo implícito, de modo tal que una vez aplicada a ellos la disposición, ésta perderá su eficacia.

Con base en lo anterior, se estima que la disposición reclamada no viola en perjuicio del quejoso su derecho de libertad de trabajo, ya que dicha norma nunca restringe o prohíbe a que el quejoso realice la actividad en que desee desempeñarse, siempre que se trate de una actividad lícita que se trata de normas que establecen que la pensión por orfandad se otorgará hasta los 25 años, siempre que demuestren encontrarse estudiando y que no cuenten con un trabajo pero esto de ninguna forma limita las actividades que el quejoso realiza o que desee realizar.

Al respecto los artículos reclamados señalan lo siguiente:

LA NACION  
LA SALA  
DE ACUERDOS

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

XII. Familiares derechohabientes a:

a) El cónyuge, o a falta de éste, el varón o la mujer con quien, la Trabajadora o la Pensionada con relación al primero, o el Trabajador o el Pensionado, con relación a la segunda, ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el Trabajador o el Pensionado, tiene varias concubinas o concubenarios, según sea el caso, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley;

b) Los hijos del Trabajador menores de dieciocho años;

c) Los hijos del Trabajador o Pensionado mayores de dieciocho años, cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen, lo que se comprobará mediante certificado médico, expedido por el Instituto y por medios legales procedentes; o hasta la edad de veinticinco años, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio superior o superior, de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo, y

d) Los ascendientes que dependan económicamente del Trabajador o Pensionado.

Los familiares que se mencionan en esta fracción tendrán el derecho que esta Ley establece si reúnen los requisitos siguientes:

1) Que el Trabajador o el Pensionado tenga derecho a los seguros, prestaciones y servicios señalados en esta Ley, y

2) Que dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley, o a otros similares en materia de servicios de salud, otorgados por cualquier otro instituto de seguridad social;

(...)

Artículo 131. El orden para gozar de las Pensiones a que se refiere este artículo por los Familiares Derechohabientes será el siguiente:

I. El cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de dieciocho años o que no sean menores de dieciocho años pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien hasta veinticinco años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo;

(...)

Artículo 134. Si el Pensionado por orfandad llegare a los dieciocho años y no pudiere mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, el pago de la Pensión por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación, previa comprobación anual mediante dictamen médico emitido por el propio Instituto para efecto de determinar su estado de invalidez, haciéndose acreedor, en caso contrario, a la suspensión de la Pensión; asimismo continuarán disfrutando de la Pensión los hijos solteros hasta los veinticinco años de edad, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo.

(...)

DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:

(...)

VI. Los Trabajadores a que se refiere este artículo, en caso de invalidez, estarán sujetos a un período mínimo de cotización de quince años para tener derecho a Pensión, misma que se otorgará por un porcentaje del promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior, conforme a lo siguiente:

15 años de servicio..... 50 %

16 años de servicio..... 52.5 %

73  
118

17 años de servicio.....	55 %
18 años de servicio.....	57.5 %
19 años de servicio.....	60 %
20 años de servicio.....	62.5 %
21 años de servicio.....	65 %
22 años de servicio.....	67.5 %
23 años de servicio.....	70 %
24 años de servicio.....	72.5 %
25 años de servicio.....	75 %
26 años de servicio.....	80 %
27 años de servicio.....	85 %
28 años de servicio.....	90 %
29 años de servicio.....	95 %

3UNAL  
MATERIA  
IVA DEL  
CUITO.  
D.R.

Los Familiares Derechohabientes del Trabajador fallecido, en el orden que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen derecho a una Pensión equivalente al cien por ciento de la que hubiese correspondido al Trabajador, aplicándose el periodo mínimo de quince años de cotización para tener derecho a la Pensión.  
(...)"

De una interpretación de las normas impugnadas, se advierte que éstas sólo establecen los requisitos para la obtención de la pensión por orfandad, lo que como ya se demostró no violenta su libertad de trabajo, señalado en el artículo 5 Constitucional, por el contrario, permiten que aquellos beneficiarios de dicha pensión y que sean mayores de 18 años y hasta los 25 años cuenten con una prerrogativa con la finalidad de brindarles oportunidad que concluyan sus estudios profesionales y con ello puedan acceder al mercado laboral para que puedan tener un sustento propio.

Ahora bien, en el caso en concreto se puede advertir, de las propias documentales aportadas por el quejoso que contraría a lo que sostiene y en virtud de que fue beneficiado con la pensión por orfandad, ha concluido sus estudios profesionales como se demuestra a continuación:

A CORTE DE  
DE LA NACION  
NDA SALA  
A DE ACUERDOS

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE AMPAROS CONTRA LEYES  
DIRECCIÓN DE AMPAROS CONTRA LEYES "A"

ASUNTO: La empresa Contadora

QUEJEN CORRESPONDA:

Se hace constar que el alumno [REDACTED] cursó el último semestre de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad de la Ciudad de México, en el periodo comprendido entre el 20 de mayo al 02 de junio, y del 06 al 08 de junio de 2017, reprobando los exámenes correspondientes del 12 al 14 de junio del 2017 y reprobando la asignatura de Contabilidad del 23 al 25 de julio de 2017.

Con un periodo intersemestral del 12 de junio al 04 de agosto de 2017.

La carrera consta de 1022 semestres.

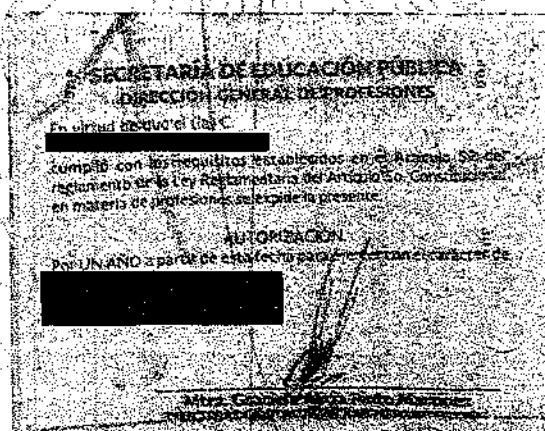
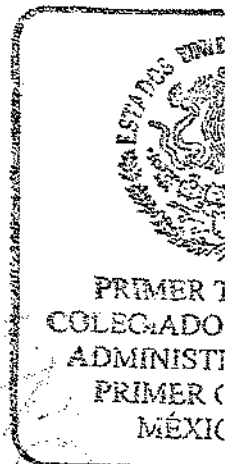
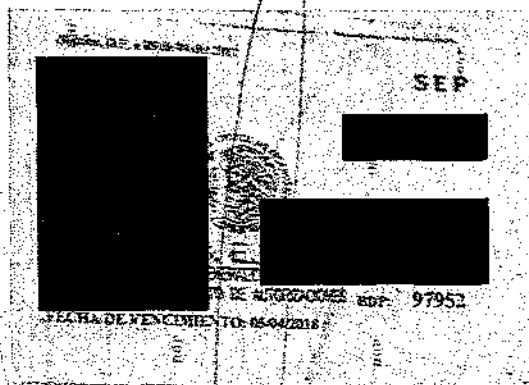
Se hace constar la presente constancia a petición del interesado para los fines legales a que da lugar.

ATENTAMENTE  
"POR SU RAZA HABLARA EL ESPÍRITU"  
América, Edo. de México, a 11 de enero de 2017.

LIC. ARACELI RODRÍGUEZ SARO VARGAS  
SECRETARÍA TÉCNICA

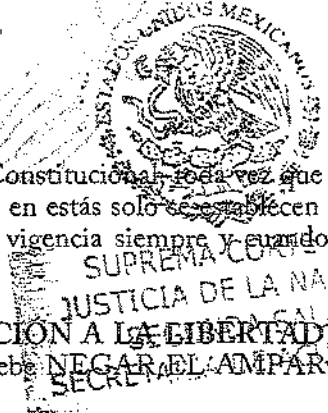
Procuraduría A.V. Alcázar y San Juan Tetoltepec S/n. Col. Sta. Cruz Acatlán  
C.P. 53160 Naucalpan de Juárez, Edo. de México  
Tel. 56231945 y 56231947 - Correo Electrónico: [REDACTED]

Además de que ha obtenido la autorización para ejercer con carácter de [REDACTED] lo cual permitirá desempeñar un trabajo remunerado conforme al artículo 5 Constitucional.



En ese sentido, como ha quedado demostrado, no se transgrede el artículo 5 Constitucional, toda vez que las normas reclamadas no impiden ni tampoco limitan la libertad de trabajo pues en éstas solo se establecen los requisitos para la obtención de la pensión por orfandad, misma que tendrá vigencia siempre y cuando el beneficiario de las misma cumpla con los requisitos exigidos.

Por todo lo anterior, su Señoría podrá advertir que **NO EXISTE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE TRABAJO**, como incorrectamente lo manifiesta el quejoso, por lo cual se debe **NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN** de la Justicia Federal.



Por lo expuesto, ante ese H. Tribunal Colegiado, atentamente se solicita:

**PRIMERO.-** Tener por presentado, en términos del presente recurso de revisión adhesiva dentro del amparo en revisión número 578/2017, relativo al juicio de amparo 1096/2017, promovido por [REDACTED]

**SEGUNDO.-** Distribuir entre las partes las copias que para tal efecto se acompañan.

**TERCERO.-** Tener como domicilio el señalado en el texto de este escrito.

**CUARTO.-** En su oportunidad se solicita al H. Tribunal Colegiado que corresponda conocer del presente asunto, confirmar el **SOBRESEIMIENTO** decretado en la sentencia que recurrida, y/o en su caso **NEGAR** el presente juicio de amparo.

ATENTAMENTE  
EN SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN,  
LA DELEGADA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE  
ATTA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL  
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE AMPAROS  
D.F.

LIC. TATIANA MIDORIEL VILLARREAL ARANDA  
Cédula Profesional 7493310, inscrita en el 1526/2017  
expedido por el Consejo de la Judicatura Federal

KM

**SENTENCIA RA-578/2017 (NEUN: 22129815)**

1er TC Administrativa del 1er Cto

Enviado: jueves, 15 de febrero de 2018 10:47 a.m.

Para: sentenciasccscjnssga@mail.scjn.gob.mx

Datos adjuntos: RA-578-2017 PENSION ORFANDAD.doc (615 KB)

De conformidad a lo ordenado en la circular 3/2011-P del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remite el archivo electrónico que contiene la sentencia dictada en el expediente **RA-578/2017 (NEUN 22142868)** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada  
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1\_1.pdf  
Secuencia: 1810154

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MARIO ENRIQUE CAMACHO MARTINEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	CAMM830822HDFMRR02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e000000000000000000000009fb	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	20/02/2018T23:08:57Z / 20/02/2018T17:08:57-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	8b 50 3e 31 21 de 9b cb 51 ca d2 d8 cc 11 bc 3d 84 c2 7a e7 0f 68 e0 51 78 61 f6 da 1b d4 ec d8 e1 80 79 aa 10 00 52 85 6e aa 9f 86 91 75 4b ac 83 6d 5b bf 8e 86 af 69 92 e3 64 21 24 fe 2a 32 1f db 68 09 fc 27 5b e3 4d 8d e8 e5 93 1b 07 4c 1f c5 36 48 f9 22 5d 8f 62 9e d0 ce 39 2e b8 0a 5b 76 6e bc 5e a1 63 e0 fd a6 20 2c 71 14 c1 30 74 b9 5e a5 45 5d 0f 28 ad ea 9f 6b f5 f0 a2 ab 1e 70 8e e3 62 75 17 6b 4a 55 d2 74 57 14 14 48 37 bb 3a 5e 66 31 aa f2 05 03 61 2f c2 52 f7 70 e0 8a 80 d7 93 6a 87 81 99 cf 2d 42 59 13 24 9d 74 bb 96 50 29 58 88 cf ef bc 10 c1 23 47 93 fc 66 84 fc eb 69 78 99 cf b5 d4 15 3a 10 49 72 05 ec d6 dc 19 61 b2 1a eb ca 4b 06 81 bd 9d 9a e8 dc a7 a0 ba b8 6c c8 f1 d3 e1 4d ce 4e 4a e1 a3 51 00 56 a0 42 4e 57 23 30 3a 6f 2e 53 64 33 76			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	20/02/2018T23:08:59Z / 20/02/2018T17:08:59-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e000000000000000000000009fb			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	20/02/2018T23:08:57Z / 20/02/2018T17:08:57-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1812835			
	Datos estampillados:	1DF5F55DF011E4273375A6616FF185DCA850D624			